

de los derechos del trabajo

Boletín de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras colombianos / Abril 2006 / N°7

OBSERVATORIO

- Las violencias que no se han nombrado
- Casos de protección constitucional a las mujeres
- Entre resistencias y re-insistencias. Contra el silencio y el olvido

Contenido

Las violencias que no se han nombrado. Violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra las mujeres sindicalizadas en Colombia

Por: Guillermo Correa Montoya 1

Casos de protección constitucional a las mujeres

Por: Beatriz Alzate Vargas 9

Entre resistencias y re-insistencias. Contra el silencio y el olvido

Por: Corporación para la Vida Mujeres que Crean 17



John Jairo Cárdenas Orrego, 2005

OBSERVATORIO
de los derechos del trabajo
Nº 7
Abril 2006



ESCUELA NACIONAL SINDICAL

Calle 51 N° 55-78
Tel: 5133100 Fax: 5122330
Correo electrónico:
coddhlab@ens.org.co
A.A. 12175
Medellín-Colombia

Director de la ENS
Luis Norberto Ríos Navarro

Director Académico
José Luciano Sanín Vásquez

Coordinador
Área de Derechos
Humanos y Laborales
Juan Bernardo Rosado Duque

Fotografía portada:
"Punto, cadeneta, punto"
John Jairo Cárdenas, 2005

Este boletín se ha realizado con la asistencia financiera de la Comunidad Europea. Los puntos de vista que en él se exponen reflejan exclusivamente la opinión de la Escuela Nacional Sindical y, por tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial de la Comisión Europea.

Las violencias que no se han nombrado

Violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra las mujeres sindicalizadas en Colombia

Por:

Guillermo Correa

Área de Derechos Humanos
Escuela Nacional Sindical

Un panorama general

En el período comprendido entre el 1° de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2005, las mujeres sindicalizadas en Colombia han sido víctimas de 1.797 violaciones contra la vida, la libertad y la integridad. De este total, 219 mujeres fueron asesinadas, 854 recibieron amenazas de muerte, veintiuna fueron víctimas de atentados de muerte con armas de fuego, diez han sido desaparecidas, 586 tuvieron que desplazarse forzosamente para proteger sus vidas y sus familias, 36 fueron detenidas arbitrariamente, diecisiete han sido víctimas de secuestro, 44 fueron hostigadas y perseguidas por su actividad sindical y cinco sufrieron torturas.

Una mirada general sobre estos datos nos revela que en los últimos cinco años las violaciones a los derechos humanos de las mujeres sindicalizadas, a lo largo y ancho del territorio nacional, han presentado un alarmante crecimiento, haciendo evidente un grave panorama,

pues el 53,4% de los femicidios ha tenido lugar en el último lustro, porcentaje que equivale a 117 asesinatos. De igual forma, en este mismo período ha ocurrido el 45,13% del total de las violaciones, siendo las situaciones más críticas las amenazas de muerte contra mujeres dirigentes y líderes, con 438 registros, los atentados, con quince casos, las persecuciones y hostigamientos, con 40 casos, y los secuestros con diez.

Características de estas violaciones¹

- Desde el año 2000 hasta 2005, fueron asesinadas, diecinueve mujeres sindicalizadas en promedio por año.
- El 2003 presentó un desbordado incremento que representó el 395% del total de las violaciones contra mujeres sindicalizadas, pasando de 41 casos en el 2002 a 203 en el 2003, crecimiento que continuó en el 2004, cuando se presentó un incremento del 18,7% al pasar de esos 203 casos de

1. Estas cifras han sido actualizadas con el rastreo de datos históricos, por lo que es posible encontrar algunas variaciones en los datos anteriormente publicados en los informes de derechos humanos de la ENS.

2003 a 242 en el 2004. En el año 2005 se presenta una reducción del 37,19% ya que del registro del año anterior se pasó a 152 violaciones registradas en el 2005.

- Entre los años 1991 y 2005, el sector de la educación es el más afectado, pues de allí procede el 87,6% del total de afectadas por las violaciones contra mujeres sindicalizadas, con 1.575 casos. Muy de lejos le siguen las trabajadoras del sector agrícola, con 68 casos, las mujeres del sector de la salud, con 46 casos, las del comercio, con doce casos, las trabajadoras de la industria manufacturera, con diez casos y las de comunicaciones y transporte con diez casos.
- En cuanto a los asesinatos, las educadoras son también las más afectadas, con 147 femicidios. A continuación se encuentran las trabajadoras del sector agrícola con treinta asesinatos y las mujeres sindicalizadas del sector salud con veintidós asesinatos.
- Los departamentos más peligrosos para el ejercicio sindical de las mujeres son: Antioquia, donde se registraron 92 homicidios, Valle del Cauca, doce asesinatos, Norte de Santander, once, Caquetá, Magdalena y Cauca, nueve cada uno, y Cesar y Santander con siete asesinatos cada uno.

Consideraciones frente a la violencia contra las mujeres sindicalizadas

Una violencia invisible con víctimas reales

Es posible que se dé la tendencia a creer, en un país con tan desproporcionados niveles de violaciones a los derechos humanos y con cifras estadísticas tan alarmantes sobre asesinatos, secuestros y desplazamientos –entre otros graves problemas–, que las cifras de vio-

laciones de mujeres sindicalizadas no reflejan la gran complejidad y gravedad de la situación, máxime en un país en el que los indicadores de la realidad de los derechos humanos, parecieran estar en una competencia por alcanzar el mayor horror. Así las cosas, las estadísticas de las violaciones contra mujeres sindicalizadas terminan siendo desestimadas e incluso observadas con cierta pasividad e indiferencia.

Resulta incluso paradójico que aun con movimientos de mujeres cada vez más afianzados y fortalecidos en la sociedad colombiana y con una creciente participación suya en el terreno, las violaciones contra sindicalistas aún no han sido nombradas con la contundencia de su gravedad, no han sido visibilizadas aún con los graves daños que dicha situación representa para el movimiento sindical. Sin lugar a dudas uno de los rasgos más característicos de estas violaciones ha sido y continúa siendo la invisibilidad a la que se les ha sometido y la mirada marginal que se les ha otorgado.

Los informes sobre mujeres, tanto de organismos internacionales como nacionales, no han incluido con suficiente énfasis la categoría de violencia antisindical contra mujeres. En algunos informes dicha categoría no existe, y pareciera incluso que las mujeres sindicalizadas no han sido víctimas de asesinatos ni amenazas de muerte, que tampoco han tenido que soportar el desplazamiento o la desaparición por su actividad sindical, y es como si la violencia contra ellas fuese una violencia de otra naturaleza, que no tiene nada qué ver con su militancia sindical.

En los dos últimos informes sobre derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, la Escuela Nacional Sindical ha señalado con preocupación el agravado y dramático aumento de violaciones a los derechos humanos de las mujeres sindicalizadas en Co-

lombia; pese a ello, las iniciativas y propuestas para reflexionar y denunciar esta situación han estado ausentes de las grandes discusiones de la vida sindical nacional.

Ahora bien, si se leen las cifras de violaciones contra mujeres considerando que éstas representan el 36% del total de la población sindicalizada (es decir, teniendo en cuenta que hay cerca de 300.000 mujeres entre los 850.000 trabajadores sindicalizados en el país), podemos apreciar la magnitud de lo que significa un asesinato de una mujer dirigente sindical. Si ubicamos en perspectiva esas 219 mujeres sindicalizadas asesinadas, lograremos dimensionar la gravedad y complejidad de la situación, al pensar en el gran número de comunidades que quedaron sin sus líderes sociales, los alumnos que quedaron sin maestras, las familias que quedaron sin madres, las organizaciones sindicales que fueron despojadas de estas mujeres dirigentes, por citar algunos ejemplos.

Distorsiones y prejuicios

“El 15 de julio de 2004 en la ciudad Bucaramanga, fue asesinada, Carmen Elisa Nova, dirigente sindical, madre y ama de casa que llevaba veintiocho años de compromiso con su movimiento sindical y había ocupado diferentes cargos en la junta directiva. Al momento de su asesinato había sido elegida fiscal del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Santander, Sintraclínicas. Con su muerte ha quedado huérfana una niña de cinco años.

“Posterior al asesinato de Carmen Elisa, se desató una oleada de amenazas con las que los paramilitares, utilizando la muerte de la sindicalista, constreñían a los demás líderes sindicales de la región a silenciar sus denuncias; amenazas que se dieron en especial contra la

presidenta de la organización sindical, Teresa Báez, amiga personal de Carmen, quien ha recibido múltiples amenazas, hostigamientos, allanamientos a su residencia y persecuciones. Teresa se enfrenta cotidianamente con sus labores de enfermera, su dirigencia en el sindicato, su hogar y la protección de su hijo quien ha sido testigo de todas las violaciones contra los derechos humanos a su madre, situación por la cual debe permanecer encerrado en su residencia mientras su madre trabaja”.

Más allá de las cifras estadísticas es necesario comprender las violaciones contra las mujeres sindicalizadas en un sentido más complejo y diverso, en su dimensión simbólica, semántica, política y cultural. Hay que entender que no basta con leer la violencia contra las mujeres sindicalizadas exclusivamente en el estrecho panorama de las violaciones y violencias infligidas contra las mujeres como si fuese sólo una discriminación por su condición de mujeres. Al hacerlo así, las violaciones contra mujeres sindicalizadas son despojadas de una lectura particular en la que debería incluirse la naturaleza específica de la violencia antisindical. Antes, por el contrario, éstas son leídas únicamente como parte de la discriminación histórica a la que han sido sometidas por su realidad de mujeres. En esta forma de lectura, una violación realizada por la actividad sindical de la mujer es asumida como un asunto de discriminación o de violencia de género.

En el horizonte más amplio de las violaciones a los derechos de las mujeres, la categoría de violencia antisindical termina siendo fusionada, amalgamada, se le hace invisible y se le interpreta como una violación que se inflige por la condición de mujer y no por la de mujer sindicalizada. Hay que entender aquí que ésta termina siendo víctima de dos discrimina-

ciones históricas, de un lado a causa de su realidad de mujer y de otro por su condición de sindicalista; es decir, la mujer es afectada por una cultura patriarcal y machista, que además es fuertemente antisindical. Dicha consideración implica ubicar cada una de las violencias y violaciones en su dimensión particular para no olvidar ninguno de sus aspectos.

De otro lado, si bien es necesario tener en cuenta el rol sindical en las mujeres, no se debe desvincular éste de sus otros múltiples roles, para no caer en dicotomías interpretativas, fraccionamientos o conceptos sesgados. Con frecuencia se alude a que las violaciones contra los derechos humanos de las sindicalistas poseen un carácter de violencia pasional, emocional, doméstica o social, dejando de nombrar otros, y se pretende desvirtuar el carácter antisindical de la violación con el argumento de que las mujeres víctimas se encontraban desarrollando otro rol diferente al propiamente sindical, es decir, que no estaban en la huelga o negociando un pliego.

Ahora bien, hay que considerar que la complejidad y simultaneidad de los diversos roles de las mujeres no se desligan al realizarlos; es decir, una mujer no es una madre de familia a una hora específica, profesora a la otra y sindicalista a la tercera; por ello la interpretación que desvincula la violación de los derechos de las mujeres sindicalizadas de sus otros roles, desconoce y parcializa la complejidad de la situación, e incluso favorece la actuación de los victimarios que escudan sus responsabilidades ante la explicación popular de que todo lo que les ocurre posee un matiz pasional o social. Es claro que las violencias y violaciones presentan diversos órdenes, y que sus manifestaciones pueden estar vinculadas con causas particulares; sin embargo, ello no implica desconocer que las mujeres en el mundo sin-

dical han posibilitado la articulación con otros movimientos sociales, y han resignificado y recreado el quehacer sindical. En este sentido se puede apreciar, por ejemplo, el caso de las educadoras de diversas regiones del país, quienes son, a la vez, líderes comunitarias, educadoras y sindicalistas; ninguna de sus actividades posee un límite definido o se escinde de las demás. Sus acciones responden a esa multiplicidad y simultaneidad de roles y, sin embargo, los asesinatos de educadoras son interpretados como consecuencia del conflicto armado o de la violencia social y nunca como consecuencia de la actividad sindical. Lo anterior nos obligaría a replantear el concepto de aquello que interpretamos como ejercicio sindical.

Marcar el cuerpo y borrar su humanidad

Otra consideración nos lleva a entender y leer las violaciones contra las mujeres sindicalizadas en su dimensión simbólica y semántica. En primer lugar, y sin intentar establecer jerarquías en las formas de violencia, es necesario afirmar que las violaciones contra los derechos a la vida, la integridad y la libertad de las mujeres sindicalizadas poseen una forma y un contenido particular y diferente de las violaciones contra los hombres sindicalizados.

Al observar la sistemática violencia que se ejerce contra los hombres sindicalistas se destaca que en la mayoría de los casos los victimarios tienen la clara intención de asesinar o silenciar al líder sindical; como tal, el tipo de violencia infligida, es de orden funcional y directa. No es frecuente encontrar una violencia elaborada, y si se quiere simbólica, en contra de los hombres sindicalistas, salvo en las situaciones donde el victimario, en busca de información, inflige alguna tortura a su víctima.

Por el contrario, la violencia ejercida contra las mujeres sindicalizadas está revestida de una fuerte carga semántica, en la cual los victimarios recurren a una serie de prácticas simbólicas y perversas para degradar a la víctima y explotar todo el contenido simbólico que culturalmente se ha depositado en el cuerpo de la mujer, y asegurar así el terror colectivo que ocasiona dicho trato despiadado.

En el cuerpo de la mujer sindicalista el victimario inscribe todo su terror, asegurándose de que dichas inscripciones comuniquen un mensaje contundente para un colectivo; el cuerpo degradado, destrozado, sometido y reducido de la víctima muestra sin reservas la falta de escrúpulos y el sinsentido humano de los victimarios; se trata de un cuerpo en el que está inscrita la ausencia de límites y miramientos, y que anuncia la capacidad del victimario de generar dolor, la intención clara de anular a la víctima y de gritar a los otros “¡miren hasta dónde somos capaces de llegar!, ¡observen nuestra falta de piedad!”, “¡contemplan el horror que les espera!”, “¡Entren en pánico con nuestras advertencias!”, “¡no estamos jugando!”

Mientras la violencia contra los hombres ubica a la víctima como el destinatario y el fin de la acción, la violencia contra las mujeres convierte a la víctima en un medio, en una advertencia pública, anulando su humanidad y generando un terror que se alimenta de sus significados culturales: la madre asesinada y torturada, la imagen de la belleza y la delicadeza ultrajada y destrozada al extremo, la líder comunitaria subyugada y reducida, la esposa violada, etc.

La violencia dirigida contra las mujeres posee, además, una fuerte connotación cultural. En la vinculación de su rol social como madres, esta asignación social la hace responsable, no sólo de su vida sino también de todo su núcleo familiar, de tal forma que la integridad y el bienestar de sus hijos están depositados en ella, y esto implica que cualquier acción contra la mujer tiene un efecto directo contra todo su núcleo familiar. Siguiendo esta lógica, los victimarios han desarrollado singulares formas de presionar o diezmar a quienes consideran su adversario y, en el caso de las mujeres sindicalizadas, su accionar está investido de una elevada dosis de terror.

De víctimas colaterales a portadoras del terror

“El 29 de mayo de 2003, la profesora María Rebeca López, afiliada a ADIDA, fue obligada a bajarse de un bus y luego fue fusilada frente a su hijo de tres años. Por otro lado, la maestra Liliana Caicedo, afiliada a Simana, había solicitado al Ejército Nacional que no utilizaran las instalaciones del centro educativo como campamento, pues ello suponía un riesgo para sus alumnos. Días después, el 21 de mayo del 2003, la profesora fue sacada de su vivienda, torturada y decapitada por personas no identificadas.² La profesora Ana Cecilia Duque fue secuestrada y asesinada por el ELN como producto de una retaliación a contra su padre.³ Lina Mamian fue asesinada el 10 de agosto del 2003 al frente de su casa, de diez impactos de bala, tras haber denunciado a un miembro de los paramilitares. Según informa-

2. Liliana Caicedo Pérez era afiliada del Sindicato de Educadores de Nariño, Simana, *Noche y Niebla*, agosto 2003, p. 277.

3. Ana Cecilia Duque fue secuestrada y asesinada el 26 de abril del 2003. Véase “Comunicado a la opinión pública de la ENS”, 2 de mayo de 2003.

ciones de la comunidad, el responsable, un paramilitar de la zona, fue capturado y luego dejado en libertad después de que su comandante, alias “Rubén”, pagó un millón de pesos por su libertad.⁴ La maestra María Isabel Fuentes Millán, de 32 años y licenciada en español y literatura, afiliada a Sutev, fue asesinada de tres impactos de bala; según la denuncia del secretario de educación,⁵ los asesinos reunieron a estudiantes y profesores y delante de ellos asesinaron a la profesora. María era madre de tres niñas, todas menores de once años.

“Estas imágenes parecen competir por el peor horror. Aquí sólo transcribimos algunas de las múltiples y dramáticas violaciones que a diario se comenten contra mujeres sindicalizadas en el país”.

Las anteriores historias parecen competir entre sí por alcanzar el peor horror; lamentablemente hay que aclarar que éstas son sólo algunas de las múltiples y dramáticas violaciones que a diario se comenten contra las mujeres sindicalizadas en el país.

Tradicionalmente, la violencia antisindical contra las mujeres ha sido interpretada como un efecto colateral de la guerra, con excepción de las acciones realizadas contra mujeres de la alta dirigencia sindical. A las mujeres se las observa como víctimas de un conflicto armado indiscriminado o como víctimas accidentales de la violencia ejercida y dirigida contra los hombres, y se tiende a creer que las sindicalistas no caen por las armas sino cuando son víctimas de una bala perdida. Por ello, las ci-

fras de violaciones contra mujeres han sido, en la mayoría de los casos, desestimadas, trivializadas y condenadas al silencio.

En último término, lo que se aprecia en el aumento de la violencia contra las mujeres es el desplazamiento de las violaciones hacia todo el núcleo familiar, lo que compromete además la integridad de personas que no pertenecen al movimiento sindical.

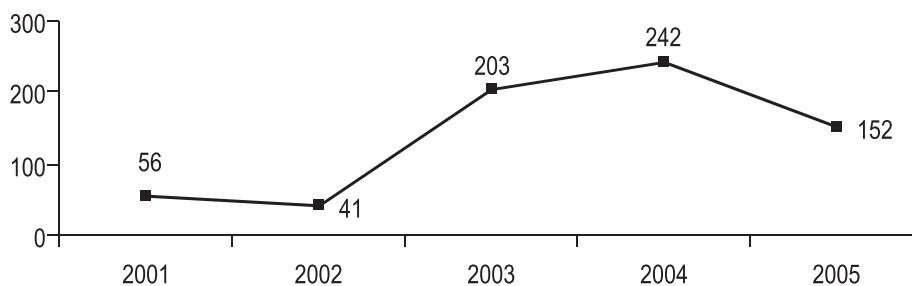
Con el incremento sustancial de las violaciones dirigidas contra las mujeres sindicalizadas, resulta posible desestimar la tesis de que éstas son apenas víctimas colaterales, pues estos casos se introducen en la lógica de una violencia discriminada, cuyos objetivos se sitúan incluso más allá de la simple intención de silenciar a la víctima. Estas acciones reflejan en sus intenciones una finalidad simbólica y estratégica para inmovilizar por medio del terror.

Una mujer asesinada en presencia de sus hijos, una mujer mutilada, una mujer a quien se le amenaza con la vida de sus hijos o a quien se utiliza como medio de presión, se convierte en un vehículo simbólico a través del cual el mensaje es ejemplar y se dirige a otros. Por lo tanto, se podría afirmar que estas violaciones no son un fin en sí mismo, no se revisten de la intención del castigo o de la venganza sino que, por el contrario, son la imagen del terror dirigido a los otros, a los hijos, los familiares, vecinos y demás sindicalistas. Lo que buscan es, contundentemente, presionar la elección entre la vida y la integridad, o la actividad sindical.

4. Lina Mamian. Al respecto véase el portal web: www.nocheyniebla.org, “Casos y hechos”, agosto de 2003.

5. José Martín Hincapié Álvarez, secretario de educación de Tulúa, departamento del Valle del Cauca, 2006.

Violación contra mujeres sindicalizadas, 2001-2005



Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical.

Total de violaciones a la vida, libertad e integridad de las mujeres sindicalizadas 1° enero 1991-31 diciembre 2005

Tipo de violación	Número casos	Porcentaje
Allanamiento ilegal	4	0,22
Amenazas	854	47,52
Atentados	21	1,17
Desaparición	10	0,56
Desplazamiento	586	32,61
Detención	36	2,00
Femicidios	219	12,19
Hostigamientos	45	2,45
Secuestros	17	2,95
Tortura	5	0,28
Total	1.797	100,00

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical.

Total de violaciones por sector económico 1991-2005

División económica	Número de casos	Porcentajes
Agricultura, caza y pesca	68	3,78
Comercio	12	0,67
Electricidad, gas y agua	7	0,39
Financiero	5	0,28
Industria manufacturera	10	0,56
Minas y canteras	4	0,22
Servicios-educación	1.575	87,65
Servicios-trabajadores municipales y oficiales	18	1,00
Servicios-judicial	13	0,72
Servicios-salud	48	2,67
Servicios-otro	17	0,94
Transporte y comunicaciones	10	0,56
Actividad económica no especificada	10	0,55
Total	1.797	100,00

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical.

Casos de protección constitucional a las mujeres

Por:

Beatriz E. Alzate Vargas y
Verónica Jaramillo Jaramillo

Área de Derechos Humanos y Laborales
Escuela Nacional Sindical

En una sociedad con desigualdades tan marcadas como la nuestra, la mujer ha sido discriminada históricamente, tanto en lo privado (en su condición de madre y esposa abnegada), como en lo público (en su condición de trabajadora, donde se le exige mucho más que al hombre). Para acceder a un empleo, a una mujer se le exige inteligencia, belleza, capacidad de trabajo y disponibilidad de tiempo, requisito, este último, con el que no cuenta pues además es madre. Mientras un hombre tiene más posibilidad de ir a trabajar un fin de semana o permanecer laborando hasta tarde en la noche, la mujer debe ir a atender labores del hogar como el aseo de la vivienda, el cuidado de los hijos e incluso la atención a su pareja. Es así como un estudio en Estados Unidos determinó que el 49% de las mujeres exitosas no tienen hijos, cifra que contrasta con el apenas 19% de sus colegas hombres en el mismo caso. “Las profesionales con cargos gerenciales constantemente se ven obligadas a escoger entre una carrera exitosa y tener una

familia”.¹ En Colombia, la mujer es discriminada desde el momento mismo de presentarse a una entrevista de trabajo, cuando se le pregunta si es casada, tiene hijos o piensa tener más, y sus respuestas constituyen un factor que será tenido en cuenta para la contratación; también cuando se le exige prueba de embarazo, sin olvidar que en ocasiones se llega al extremo de exigir constancia de ligadura de trompas. Una vez en el desempeño de la actividad laboral, la mujer es nuevamente discriminada cuando su remuneración queda por debajo de la de los hombres que ejecutan el mismo trabajo, o se le exigen mayores pruebas para acceder a la misma remuneración. Además, las mujeres son, con mucha más frecuencia que los hombres, víctimas del acoso sexual y laboral por parte de compañeros y jefes.

Por ello, para proteger a la mujer, que se ha visto discriminada o excluida por estereotipos culturales creados y fijados socialmente, se requiere que las autoridades públicas cumplan y promuevan el principio de respeto e

1. María Fernanda Moreno, “Sobre la brecha salarial”, *Semana*, may, 2005.

igualdad consagrado en la Constitución Política, en los artículos 13 y 43, y que las instancias judiciales y administrativas tomen sus decisiones haciendo respetar los derechos fundamentales y protegiendo los intereses de las mujeres que viven una situación de discriminación, tal y como lo ha hecho en algunos casos importantes la Corte Constitucional.

Como ejemplos del trabajo que se ha hecho para disminuir la discriminación que afecta a muchas mujeres en el país, sirven algunas de las sentencias que la Corte Constitucional ha emitido, en las cuales da aplicación a las normas y principios constitucionales y desarrolla las acciones positivas para dar protección especial a la mujer, sobre todo a aquella que es también cabeza de familia.

Sentencias que protegen derechos laborales de las mujeres

Estabilidad laboral reforzada

La Corte Constitucional mediante sentencia T-173/2005² reitera su jurisprudencia y establece que la mujer embarazada tiene el derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez (debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las empresas). Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, como consecuencia del principio de igualdad, la mujer embarazada goza del derecho fundamental a no ser desvinculada de su empleo por esta razón.

También son titulares de tal derecho las funcionarias de la Rama Judicial, tanto si se encuentran nombradas en propiedad o en provisionalidad, pues la protección del derecho enunciado conlleva necesariamente la imposibilidad de que la mujer embarazada sea retirada del puesto de trabajo con ocasión de su embarazo. Así las cosas, ha de concluirse por fuerza que el principio según el cual el empleado de carrera designado en propiedad cuenta con estabilidad laboral, mientras que el nombrado en provisionalidad carece de ella, encuentra excepción en caso de que la empleada nombrada en provisionalidad estuviese embarazada, pues el fuero o protección a la maternidad opera con independencia del tipo de relación laboral, y la estabilidad que brinda se extenderá mientras se den los supuestos que configuran el fuero.

Así mismo, mediante sentencia T-228/2005³ se consagra la protección de “la estabilidad laboral reforzada”, en los siguientes términos:

Es procedente la acción de tutela para proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo, cuando se encuentren plenamente demostradas las siguientes condiciones: En primer lugar, que exista una vinculación laboral –o reglamentaria– entre la parte actora y la persona o entidad accionada; segundo, es necesario que el despido o la desvinculación se ocasione durante el embarazo o durante los tres meses siguientes al parto; en tercer lugar, la desvinculación se debe producir sin los requisitos pertinentes para cada caso; cuarto, debe demostrarse que el empleador conoce o debe conocer el estado de embarazo de la trabajadora; y

2. M.P. Jaime Araujo Rentería

3. M.P. Jaime Córdoba Triviño

quinto, que el despido amenace el mínimo vital de la actora o que la arbitrariedad resulte evidente y comporte un daño grave y notorio.

Por otro lado, el ordenamiento jurídico colombiano, ordena que la mujer trabajadora que se encuentre en estado de embarazo, tiene derecho a permanecer en su empleo hasta tanto el empleador –público o privado– demuestre la existencia de una justa causa para proceder a la respectiva desvinculación. Tanto si se trata de trabajadoras oficiales o de empleadas del sector privado, la justa causa debe constar en el permiso de la autoridad laboral competente. En materia de servidoras públicas bajo el régimen de carrera o de libre nombramiento o remoción, cualquiera sea el régimen y la institución a la cual estén vinculadas, la justa causa debe aparecer claramente expuesta en el acto administrativo a través del cual se ordena la desvinculación o, de lo contrario, el juez competente deberá ordenar el reintegro laboral así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Igualmente manifestó la Corte en esta sentencia, que la protección especial de la trabajadora que se encuentra en estado de gestación no se reduce a la garantía de la propia subsistencia económica sino que tiende a satisfacer también su derecho a la igualdad, al trabajo efectivo y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. En consecuencia, la indemnización consagrada en algunos regímenes laborales para remediar la presunta discriminación es un mecanismo insuficiente para garantizar los derechos amenazados por el despido injusto, pues sólo satisface uno de los derechos afectados. Por lo tanto se ha entendido que la mujer embarazada que ha sido

despedida o desvinculada tiene derecho al reintegro laboral en todos aquellos casos en los cuales la desvinculación se produjo sin el permiso de la autoridad laboral competente o a través de un acto discrecional no motivado o con motivaciones vagas e insuficientes para desvirtuar la presunción de la discriminación.

Protección laboral a madres cabeza de familia

Mediante la sentencia SU-388/2005⁴ la Corte Constitucional ordenó el reintegro de todas las madres cabeza de familia despedidas de Telecom, por la reestructuración de la empresa en el año 2003. Aunque el fallo se produjo porque veintitrés madres cabeza de familia presentaron acción de tutela, la Corte extendió los efectos, en esta sentencia de unificación, a las madres que en otras oportunidades demandaron y obtuvieron fallos adversos, y a las que no demandaron.

Las madres cabeza de familia gozan de una protección especial consagrada en el artículo 43 de la Carta; esta protección es una de las llamadas acciones afirmativas o políticas, que favorecen a personas o grupos históricamente discriminados con el fin de reducir o eliminar las desigualdades sociales. La protección especial a las madres cabeza de familia debe entenderse como protección al grupo familiar y especialmente a los niños que de ella dependen. En este mismo sentido se pronunció el máximo tribunal constitucional, en la sentencia T-546/2005,⁵ donde además consideró que aun existiendo otros mecanismos judiciales para asegurar las medidas de estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza de familia,

4. M.P. Clara Inés Vargas Hernández

5. M.P. Jaime Araújo Rentería

diseñadas en los procesos de reestructuración del Estado, tales mecanismos no resultan idóneos para la protección de los derechos fundamentales, por lo que la acción de tutela es procedente ya que es el medio más eficaz.

Mediante sentencia T-493/2005,⁶ que resolvió varios procesos acumulados, la Corte Constitucional dio aplicación a la sentencia SU-388/05. Allí determinó que los casos acumulados en el proceso se inscribían dentro del universo de madres cabeza de familia beneficiadas por la extensión de efectos más allá de las partes determinadas en la sentencia SU-388/05 y luego, en la referida sentencia, se ordenó que el liquidador ejecutara lo allí dispuesto. Cabe anotar que en muy pocas decisiones judiciales se ha determinado que una sentencia tenga efectos para personas diferentes a las que fueron partes en el proceso, y de ello deriva la gran importancia que tienen estas sentencias, máxime tratándose de la protección constitucional de la que gozan las madres cabeza de familia.

Prohibición de exigir prueba de embarazo

No puede exigirse prueba de embarazo para ingresar al empleo o para permanecer en él. Así lo determinó la Corte Constitucional mediante sentencia T-873/2005⁷ al considerarse ilegítima e inconstitucional la conducta del empleador que tienda a reprochar e impedir el embarazo de la trabajadora o a investigar si existe tal condición para permitirle o no el ingreso, la permanencia o la promoción en el trabajo. La exigencia de la prueba de embarazo en esta situación vulnera los derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo; ninguno de estos derechos

puede ser sacrificado por la voluntad del empleador, de tal manera que la mujer se vea forzada a elegir entre la oportunidad laboral y su expectativa natural de ser madre y de conformar una familia.

Así mismo es prohibida la exigencia de prueba de embarazo como requisito para renovar los convenios de asociación en una cooperativa de trabajo asociado. También recordó la Corte que la vinculación formal a estas cooperativas no excluye que en la práctica surja una relación de trabajo, cuando se establece una relación de subordinación con la asociada.

Sentencias que protegen derechos de las mujeres en otros ámbitos de su vida

Condiciones para acreditar la calidad de madre cabeza de familia

La Corte Constitucional determinó que no se vulnera el derecho de igualdad a los hombres, cuando se permite la prisión domiciliaria sólo a las madres cabeza de familia, al resolver la demanda de inconstitucionalidad en contra de la “Ley 750 de 2002 por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a la mujer cabeza de familia”. Tal ley, en su artículo 1° prescribe que “la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la infractora sea *mujer* cabeza de familia, en el lugar de su residencia...” para algunos delitos determinados, y siempre y cuando se cumplan requisitos como que “el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial

6. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

7. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente.”

Esta norma fue declarada ajustada a la Constitución mediante la sentencia C-184/2003,⁸ en la cual manifestó la Corte que: “El apoyo especial a la *mujer cabeza de familia* es un mandato constitucional dirigido a todas las autoridades públicas. Con él se buscó (i) promover la igualdad real y efectiva entre ambos sexos; (ii) reconocer la pesada carga que recae sobre una mujer cabeza de familia y crear un deber estatal de apoyo en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal, para compensar, aliviar y hacer menos gravosa la carga de sostener su familia; y (iii) brindar, de esta manera, una protección a la familia como núcleo básico de la sociedad”.

También se tuvo en cuenta, tanto por parte del legislador al producir la ley 750/02 como de la Corte Constitucional al emitir esta sentencia, que las consecuencias negativas de la ausencia de la madre por razón de estar privada de la libertad se presentan con mayor facilidad en los estratos más bajos, ya que en estos casos son los menores los que deben salir a buscar el sustento diario y permanecer solos sin apoyo y sin controles de ninguna clase, originando consecuencias aún más graves para la sociedad y convirtiéndose en un factor de incremento de la criminalidad.

Por otro lado, con esta norma no se vulneran los derechos de los hombres cabeza de familia, puesto que el legislador puede adoptar medidas de protección de personas que integran grupos respecto a los cuales la Constitución, de manera expresa, establece un man-

dato de apoyo especial, sin que ello desconozca el principio de igualdad.

“Así pues, constitucionalmente no es admisible que un hombre cabeza de familia solicite que se le extienda una medida adoptada por el legislador en apoyo a la mujer cabeza de familia, con base en una supuesta vulneración al principio de igualdad, cuando precisamente el artículo 43 de la carta política, tiene por finalidad servir de sustento constitucional al Legislador y al Estado en general para que adopte medidas a favor de ese grupo sin tener que extenderlo a otros, en especial su punto de comparación inmediato, el de los hombres en las mismas circunstancias. No obstante, la Corte ha señalado que las acciones afirmativas deben respetar la Constitución para evitar, entre otros, que se conviertan en medidas irrazonables o desproporcionadas”.

Así se expresa la sentencia, que más adelante agrega:

“La Ley 750 de 2002 consagra legítimamente un régimen especial en materia de prisión domiciliaria, en desarrollo de específicos mandatos constitucionales a favor de la niñez y de apoyo a la mujer cabeza de familia. En conclusión, el principio de igualdad no exige extender a los hombres, la medida de apoyo especial a las mujeres cabeza de familia consistente en acceder, cuando reúnan ciertos requisitos de ley, al derecho a la prisión domiciliaria. Tampoco el derecho a tener una familia impide que quien ha sido sancionado a pena de prisión sea separado de su familia y, por ello, el derecho mencionado no tiene que ser concedido también a los hombres cabeza de familia para que éstos puedan disfrutar de su familia”.

8. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

No obstante, cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, el derecho podrá ser concedido por el juez a los hombres que, de hecho, se encuentren en la misma situación que una mujer cabeza de familia, para proteger, en las circunstancias específicas del caso, el “interés superior del hijo menor o del hijo impedido”.

En esta sentencia la alta corporación señaló además que para tener la calidad de madre cabeza de familia, se deben acreditar las siguientes condiciones:

1. Que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar.
2. Que esa responsabilidad sea de carácter permanente.
3. Que la pareja se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre, y no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar; o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte.
4. Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solidaria de la madre para sostener el hogar.

Discriminación por el estado civil de la mujer

No se puede exigir un estado civil a la mujer como condición testamentaria. A esta conclusión llegó la Corte Constitucional mediante sentencia C-101/2005,⁹ en la que se declaró inexecutable el artículo 1134 del Código Civil,

que permitía al testador condicionar el derecho de usufructo, uso o habitación o a una pensión periódica a una mujer mientras permaneciera soltera o viuda.

“Esta condición pudo tener alguna lógica en una época social y económica eminentemente patriarcal, en donde la mujer era vista como elemento de adorno, cuya función era servir y hacer feliz al hombre [...] Esta norma perpetuaba la histórica discriminación a la que se ha visto sometida la mujer.” Por esto, para la Corte en la actualidad no existen motivos constitucionalmente válidos que permitan admitir esta diferencia de trato para la mujer, respecto del otorgado a los hombres (a quienes no se les impone la misma condición), dado que ello constituye un acto discriminatorio que vulnera el derecho fundamental a la igualdad, y que desconoce la especial protección que el Estado debe brindar a la mujer para garantizar la igualdad real y efectiva de derechos. En el actual ordenamiento constitucional el sexo no puede ser un criterio de diferenciación entre individuos que se encuentren en una misma situación, como puede ser la necesidad de obtener una herencia con la que se pueda proveer la subsistencia. Así mismo, con esa norma se vulneraba el libre desarrollo de la personalidad.

Intimidación de las mujeres

Se debe respetar la intimidad de las mujeres víctimas de delitos sexuales. Esta fue la tesis de la Corte Constitucional al determinar, mediante la sentencia T-453/2005,¹⁰ que en cuanto a los derechos de las víctimas de delitos sexuales, se establecen en el derecho internacional varios compromisos para que los Estados garanticen a la mujer que ha sido víctima

9. M.P. Alfredo Beltrán Sierra

10. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

de este tipo de violencia su derecho a ser tratada con consideración y a que se respete su dignidad, así como el hecho de que tomen medidas que eviten una segunda victimización. En efecto, algunos instrumentos internacionales de los que Colombia hace parte han abordado el tema de la protección de las víctimas de violencia sexual dentro del proceso penal, y han reconocido la obligación de las autoridades de dar a las víctimas un trato digno y respetuoso, y de adoptar medidas para reducir los riesgos de la doble victimización que pueda ocasionarse en la práctica de pruebas o de otras diligencias judiciales, o en el manejo de la información sobre los hechos del proceso y la identidad de las víctimas.

De lo anterior se concluye que, cuando una mujer es víctima de un delito sexual, tiene el derecho constitucional a que se proteja su derecho a la intimidad contra la práctica de pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima, como ocurre, en principio, cuando se indaga genéricamente sobre su comportamiento sexual o social previo o posterior a los hechos que se investigan. Tal circunstancia transforma las pruebas solicitadas o recaudadas en pruebas constitucionalmente inadmisibles, frente a las cuales tanto la carta como el legislador ordenan su exclusión.

Libre desarrollo de la personalidad

Si la dirección de un reclusorio, u otra autoridad carcelaria imparte una instrucción en la cual exige el uso de falda a las mujeres visitantes del establecimiento, como requisito para ingresar y permanecer en el mismo, incurre en una clara vulneración de los derechos funda-

mentales al debido proceso. Así lo estableció la Corte Constitucional, mediante sentencia T-624/2005,¹¹ por cuanto no existe norma que contenga esa exigencia (pues la propia ley 65 de 1993 prohíbe toda forma de discriminación, lo cual se evidencia en estos casos por el factor sexo), y siendo claro que no existe fundamento razonable para exigir a las mujeres visitantes el uso de este tipo de prendas, tal exigencia constituye un trato desigual, no justificado ni permitido por la Constitución. Así mismo se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como quiera que se imponga a un particular una determinada forma de vestir, sin que tenga motivo jurídico que lo explique, como sí sucede en el caso de los reclusos.

Protección a la intimidad y derecho de igualdad

La Corte, mediante sentencia T-848/2005,¹² ha reiterado que ordenar a una persona quitarse la ropa interior durante las requisas previas a la visita a un centro penitenciario, que se le revisen sus genitales y que se le obligue hacer cuclillas para revisar si porta algún elemento peligroso, es un tipo de requisa que no está permitida ni constitucional, ni legal, ni reglamentariamente. Sin embargo, este tipo de prácticas pueden llegar a darse por razones fundadas, siempre y cuando medie el consentimiento informado del afectado y el registro se practique de modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad física y jurídica vulnerada. Los anteriores condicionamientos hacen necesarios entonces un mandato legal, la supervisión judicial, la intervención del personal experto y el uso de instrumental y condiciones sanitarias adecuadas.

11. M.P. Álvaro Tafur Galvis

12. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

De igual forma, prohibir el ingreso el día de visita a mujeres en período de menstruación es una práctica inconstitucional, toda vez que las mujeres visitantes no pueden ser discriminadas por tal situación. Si no es razonable constitucionalmente que la guardia requiese con tactos vaginales, mucho menos puede considerarse razonable prohibir el ingreso a toda mujer por el sólo hecho de estar menstruando. El estar en este período no constituye, por sí sólo, prueba o indicio de que se va a cometer ilícito.

Protección a estudiantes embarazadas

Se ha señalado de manera reiterada por la Corte Constitucional que someter a una estudiante embarazada a portar uniforme de otro color, incluirla en un proceso de desescolarización, hacerla estudiar en una jornada diferente o imponerle cualquier otro trato discrimi-

minatorio, constituye una sanción moral que es constitucionalmente inadmisibles. En particular se señaló en esta sentencia (T-918/2005)¹³ que el embarazo de una estudiante no es un hecho que pueda limitar o restringir su derecho a la educación. Los manuales de convivencia de las instituciones educativas no pueden ni explícita, ni implícitamente tipificar como falta o causal de mala conducta el embarazo de una estudiante.

Los anteriores son sólo unos pocos casos de protección especial a las mujeres, frente a la enorme discriminación de padecen. Ello muestra que si bien se han dado cambios en lo que a la igualdad de género se refiere, éstos no han sido suficientes para acabar con las desigualdades existentes; así pues, se requiere una política pública y social más comprometida para promover y reconocer el derecho a la igualdad de las mujeres.

13. M.P. Jaime Córdoba Triviño

Entre resistencias y re-insistencias Contra el silencio y el olvido*

Corporación para la Vida
Mujeres que Crean

Pero el olvido no ha operado solamente como olvido,
sino como destrucción y muerte
Marta Cecilia Vélez Saldarriaga

Un sábado por la noche yo estaba con mis amigas, y nos fuimos a bailar a otro barrio al lado del de nosotras, porque por la casa no hay ambiente para bailar. Cuando estábamos por allá dos de mis amigas se pusieron a pelear, y estuvieron un rato peleando en la calle, pero en un momento unos amigos nos dijeron que teníamos que dejar la peledera, porque si no los muchachos de arriba nos metían al mojón, o sea a la alcantarilla; por allá varias veces han metido a otras personas.

Nosotras mejor nos fuimos para otra parte, y de todas maneras nos dijeron que si nos veían peleando nos iban a meter a la alcantarilla para que aprendiéramos.

A nosotras no nos metieron esa noche porque nos fuimos de allá, pero a otras personas sí las han metido, a las mujeres las amenazan mucho con eso, sobre todo cuando pelean en la calle, y a los hombres, cuando hacen algo que a esos muchachos no les gusta.

Yo no sé quiénes son los que hacen esos castigos pero mucha gente nos ha dicho que ellos son los que mandan por allá, que ellos son los que le dicen a la gente lo que no puede hacer.

Testimonio de una joven habitante de la zona nororiental de la ciudad, noviembre de 2005

Presentación

La Corporación para la Vida Mujeres que Crean quiere aportar a la construcción de un modelo de justicia que reconozca la palabra de las mujeres, y en especial, que recoja las voces de las mujeres víctimas del conflicto ar-

mado en la ciudad de Medellín y del Valle de Aburrá. Nos convoca el interés por hacer visibles los derechos humanos de las mujeres y sus niveles de desconocimiento y vulneración.

* Informe sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres y el derecho internacional humanitario en Medellín y Área Metropolitana, diciembre del 2005.

Por lo anterior, y convencidas de que este es un momento histórico muy importante para esta ciudad y para el país, en términos tanto de la negociación del conflicto político armado como de los acercamientos entre el gobierno nacional y los actores del conflicto, queremos introducir en el debate público la importancia de que se vea con diferencia y equidad la situación de las mujeres. Además, lo que significó y significa para todas, la presencia en la cotidianidad de los actores armados y su poder de dominación y control.

Así las cosas, en el año 2005 la corporación, además de continuar con el seguimiento a la situación de las mujeres en términos del respeto de sus derechos, retoma con especial atención el tema de la impunidad. De igual manera, introduce preguntas que están ligadas a la situación de conflicto armado vivido en la ciudad de Medellín y que hacen parte de los asuntos controvertidos de los actuales procesos de paz o negociación, como se han llamado.

Los informes realizados en los años 2002, 2003 y 2004, ya han presentado un análisis cuantitativo y cualitativo sobre la violación de algunos derechos humanos de las mujeres, que por las características sociopolíticas y conflictivas de la ciudad, daban cuenta de una problemática que se centra, con mayor magnitud y proporciones, en las mujeres.

En el año 2005, la consolidación del proyecto legislativo con el que se espera la superación del conflicto con algunos actores armados, plantea un escenario de impunidad para quienes han cometido delitos atroces y de lesa humanidad, delitos con los cuales han dado una clara demostración de poder en la ciudad y en el país, agrediendo con fuerza a las mujeres y convirtiendo sus vidas y sus cuerpos en territorio de la guerra.

Con esta tarea de recolección y análisis de información, nos parece que podemos contribuir al mantenimiento de la memoria y aportar a las autoridades gubernamentales y judiciales encargadas tanto del diseño e implementación de las políticas como la del juzgamiento de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, elementos que se deben tener en cuenta sobre las condiciones de discriminación y opresión históricas contra las mujeres.

Humanidad herida: las mujeres y el derecho a la vida

Hablar de los derechos humanos de las mujeres es un asunto que trasciende las cifras de muertes. Sería mucho más preciso si se hablara de condiciones plenas de vida, y sin embargo, por las características de los informes que se realizan internacionalmente sobre la situación de los derechos humanos, existe la tendencia a dar el protagonismo a las cifras de muertes violentas, como el asesinato.

Ello se explica, indiscutiblemente, porque los gobiernos dan cuenta de las condiciones de seguridad a partir de la cantidad de homicidios que se cometen, y de cálculos a partir de las tasas de muertes por cada 100.000 habitantes.

En la ciudad de Medellín esa tasa ha disminuido sustancialmente. Así, ha dejado de ser una de las ciudades más violentas del mundo, al pasar de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 1991, a 54 en el año 2004.

Esa disminución es la principal fuente y prueba a la vez del actual gobierno local (2002-2006), de la mejoría en la situación de derechos humanos, y aunque es una tendencia marcada desde el gobierno del alcalde Luis Pérez (2001-2003), es un hecho que se conso-

Asesinatos en Medellín por año

Año	Mujeres	%	Hombres	%	Total ciudad	Variación
2003	128	7,2	1641	92,7	1769	-52%
2004	84	8,9	939	91,7	1023	-42%
2005	25	8,2	302	92,3	327	-32%

lida, y hasta cierto punto se estabiliza, bajo el actual gobierno municipal del alcalde Sergio Fajardo.

Desde el año 2002, año en que la corporación empieza la publicación de este informe, las cifras han tenido el comportamiento que se muestra en el cuadro de arriba.

En los últimos tres años las muertes de mujeres han representado los siguientes porcentajes: 7,2% del total de homicidios en el 2003, 8,9% en el 2004 y 8,2% en el primer semestre del 2005. Eso significa que en el 2004 aumenta 1,7% con respecto al 2003, y en el 2005 (primer semestre), disminuye al 0,7% con respecto al 2004. Como puede observarse, aunque ha habido una disminución en el total de asesinatos en la ciudad, no es tan significativa para la población de mujeres, y en algunos casos, como en el año 2004, incluso se presenta un aumento de más de un punto porcentual.

El ritmo de disminución de muertes de mujeres no es acorde con la tendencia general que se observa. Esto podría indicar que no sólo el conflicto armado y la delincuencia son los causantes de sus muertes violentas. Por ello, en lo que respecta a las mujeres, los procesos de negociación del conflicto armado y otras medidas en el campo de la seguridad ciudadana no son suficientes. Mientras siga subsistiendo una cultura que perpetúa estereotipos de virilidad y de amor combinados con el uso la violencia contra las mujeres, no se podrán

prevenir y eliminar en forma efectiva las violencias contra las mujeres y, en particular, sus muertes.

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los más humanos de los derechos

En términos de la violencia sexual, las múltiples facetas en que se manifiesta, permiten diversas miradas, aunque la realidad sigue mostrando la recurrencia de un patrón de comportamiento que doblega la dignidad de las mujeres y que las convierte en objetos, desconociéndoles el mínimo derecho a decidir sobre su sexualidad y la reproducción, en lo que además se configura como un acto de dominación y humillación.

No disminuye...

¿Qué ocurre en el caso de la violencia sexual contra las mujeres?, ¿acaso los derechos sexuales y reproductivos no hacen parte de los derechos humanos? ¿Por qué los índices de estos últimos mejoran y aún así las mujeres siguen siendo violadas y abusadas físicamente? ¿Acaso se trata de un hecho no significativo para el gobierno local, en tanto no se nombra como uno de los asuntos de especial interés, ni como prueba de la seguridad en la ciudad?, o simplemente ¿se trata de un asunto privado que no implica la observancia en términos de la política de seguridad, ni sanción a los responsables

de tales violaciones a los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres?

Las cifras son verdaderamente alarmantes, pues diariamente hay dos mujeres (de acuerdo con las denuncias), que son víctimas de abuso sexual, y cada día una mujer denuncia que ha sido violada. Esto significa que los casos serían muchos más, pues persiste el miedo, la resistencia y la vergüenza a denunciar.

Durante el primer semestre del 2005, 413 mujeres fueron atendidas para examen físico por alguna forma de agresión sexual; es decir,

por lo menos dos mujeres fueron víctimas de violencia sexual por día. De las mujeres violadas, 149 tenían evidencias de la penetración del órgano sexual masculino y 56 habían sido violadas con otros objetos.

Es importante resaltar que 342 mujeres eran menores de dieciocho años y de ellas 293 eran menores de quince. Lo que significa que el 82% de las mujeres agredidas sexualmente eran menores de edad y el 70% de ellas tenía menos de quince años.

Delitos contra la libertad sexual Violencia sexual enero-junio

Año	Número de agresiones	Víctimas menores de edad	Víctimas menores de 15 años
2004	399	315	288
2005	413	342	293

Fuente: Medicina Legal.

El derecho a una vida libre de violencias

En el primer semestre del 2005, cuatro mujeres murieron en episodios de violencia intrafamiliar y en el segundo semestre, tres mujeres más. Las siete fueron asesinadas por sus respectivos compañeros sentimentales, quienes ya las habían violentado previamente.

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es una práctica permanente que sólo trasciende las esferas de lo privado cuando las consecuencias son de la magnitud del asesinato, pero esos crímenes se pueden prevenir perfectamente si se brinda una atención adecuada y oportuna.

Cuando las mujeres acuden a las instancias de protección, normalmente encuentran que los funcionarios, e incluso las funcionarias, de las instituciones tienen expresiones de culpabilización hacia ellas. En la mayoría de los ca-

sos se presiona para que, mediante procesos de conciliación, se resuelvan los abusos, atropellos e irresponsabilidades de sus cónyuges, que la mayoría de las veces han configurado delitos y violaciones a los derechos humanos de las mujeres, así como de las niñas y los niños.

Esto resulta completamente contrario a la atención adecuada y pertinente que se espera de una institución. Existe hoy un sistema de justicia misógino y patriarcal que termina aduciendo razones de amor extremo en los asesinatos, considerando al momento de la judicialización argumentos como los celos, la inconciencia y la falta de lucidez, y que termina por nombrar el hecho violento como 'un crimen pasional'. Esto sin tener en cuenta (como lo han demostrado múltiples investigaciones), que este tipo de crímenes es el desenlace de una

relación conflictiva de pareja. No es algo que se presenta de manera abrupta e impensada sino una actitud donde la violencia extrema es la que resuelve el problema.

En la sala de "atención al usuario" de la Fiscalía General de la Nación, entre enero y julio del 2005, se atendieron 18.015 personas, de

las cuales 14.046 eran mujeres, o sea, un promedio de 66 mujeres por día. No se incluyen (según los datos de la Fiscalía), las personas que acuden en pareja, pero se estima que entre quince y veinticuatro parejas llegan diariamente a resolver problemas de violencia intrafamiliar.

Con las alas rotas: el derecho de las mujeres a la libertad

Personas desaparecidas de enero a septiembre de 2004

2004	Total	Vivas	Muertas	Continúan desaparecidas
Mujeres	71	45	5	21
Hombres	154	56	9	89

Fuente: Área de identificación de personas del CTI.

Personas desaparecidas entre enero y septiembre de 2005

2004	Total	Vivas	Muertas	Continúan desaparecidas
Mujeres	84	29	0	55
Hombres	144	36	4	104

Fuente: Área de identificación de personas del CTI

Como vemos en los cuadros anteriores, hay un aumento bastante significativo en las desapariciones de las mujeres. Vemos que durante los primeros nueve meses del año 2004 y en el 2005, el aumento en el segundo año con respecto al año anterior es de trece mujeres, lo que quiere decir que la desaparición aumentó en un 15%.

Puede decirse, entonces, que tampoco en términos de la libertad individual se da, durante el 2005, una situación de derechos humanos que sea mejor con relación a los años anteriores, y se ratifica la hipótesis planteada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Medellín, según la cual la desaparición forzada va en aumento con relación a otros delitos.

Según datos del CTI, en Medellín, durante

los primeros nueve meses del 2005, las desapariciones voluntarias aumentaron en un 19%. Es decir, mientras en el 2004 el porcentaje de personas que dejaron sus entornos voluntariamente, sin dejar rastros ni noticias de su paradero, fue del 1%, mientras en el 2005, durante los meses mencionados, ese índice aumentó al 20%.

La justicia para las mujeres desplazadas

Cuando las mujeres en situación de desplazamiento reconstruyen su historia en el marco de la violencia y del conflicto armado, empieza a fluir una memoria que, aparte de sanar efectos en lo subjetivo, va proporcionando nuevas significaciones de lo que pasó. Se

trata de una memoria que a la par que recupera su devenir histórico como mujeres y como víctimas, permite recorrer territorios, actores, recuperar nombres de parajes, víctimas y victimarios. Una memoria que de algún modo, logra desenmascarar el juego de intereses que se erige de fondo en el escenario del conflicto armado que las ha afectado; que no permite el olvido de presencias y controles de los actores armados, ni de las prácticas generalizadas de omisión y connivencia del Estado que se convierte así en cómplice de la destrucción. Ésta es una memoria que les permite reconocer que dichas prácticas siguen presentes en esta ciudad y que siguen determinando su actuar en lo privado, en lo social y en lo político.

En definitiva, dar la palabra a las mujeres víctimas del desplazamiento es permitir que se construya una memoria que rompa el silencio y empiece a abrirle camino a la verdad que ha sido silenciada, prohibida. Bajo esa lógica del silencio, las mujeres han asumido que la violencia ejercida sobre ellas era un asunto natural, inmodificable, y es así como se “acostumbraron” a las violaciones de sus derechos. Es de esta manera (no hablar al respecto de lo sucedido) como se configura la lógica de la sumisión y de la obediencia, y hacer parte de la verdad silenciada cuya impunidad milenaria desgarró y amilana a la mitad femenina de la especie humana.

Mientras se construye una historia con grandes dosis de discriminación, exclusión y violencia, irrumpe otro enemigo para posicionarse en las vidas de las mujeres y sus territorios: el conflicto armado, que además de portar la violencia que ellas ya reconocen, porta la de las armas que no sólo mata en lo simbólico sino que mata en lo real, destruye y arrasa. Este enemigo empieza a cobrarles un precio que

para la inmensa mayoría de ellas es incomprensible.

Las ayudas pueden tardar años en llegar. En Medellín, la atención a estas mujeres está a cargo de la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada, entidad que atiende sólo mediante cita previa asignada telefónicamente y con la cual es casi imposible comunicarse, máxime cuando no se cuenta con teléfono en la residencia para dedicarse a marcar y a esperar, sino que toca hacerlo desde un teléfono público con temporizador, lo que obliga a hacer innumerables intentos que comúnmente son fallidos. Esto, día a día, sigue mancillando su dignidad y agotando su esperanza.

Las extenuantes tareas que la situación del desplazamiento les impone, dificulta que se articulen a propuestas y a actividades colectivas y organizativas que posibiliten construir alternativas para resolver las dificultades comunes que las agobian. Sin embargo, la necesidad vital de las mujeres de encontrarse con las vecinas y compartir entre ellas nostalgias y desesperanzas, les ha permitido establecer lazos que se van entretejiendo para fortalecerlas en la dura persistencia por la vida.

Es hora de reconocer y hacer visible la labor invaluable de las mujeres que desde sus familias y sus barrios son protagonistas de la reconstrucción del tejido social deteriorado por el conflicto armado. Con esfuerzos inconmensurables, ellas están ahí con su historia, en medio de la adversidad, utilizando todos sus recursos vitales para suplir la falta de atención y de apoyo por parte de un Estado y de unos gobiernos irresponsables e injustos.

Ellas permanecen luchando por sus derechos, que incluyen los de “verdad, justicia y reparación”, y tomándose la palabra para expresar su verdad por tanto tiempo silenciada y

de los derechos del trabajo

Bulletin on the Human Rights of Colombian Workers / Abril 2006 / N°7

OBSERVATORIO

- **Violences Yet To Be Named**
- **Cases of Constitutional Protection for Women**
- **Between Resistance and Resistance. Against Silence and Forgetting**

Content

Violences Yet To Be Named. Violationes Against Life,
Freedom And Integrity Of Unionized Women In Colombia
By: Guillermo Correa Montoya 1

Cases of Constitucional Protections for Women
By: Beatriz Alzate Vargas 9

Between resistences and re-insistences.
Against silence and forgetting
By: Corporación para la Vida Mujeres que Crean 17



John Jairo Cárdenas Orrego, 2005

Labor Rights
OBSERVATOY
Nº 7
April-2006



ESCUELA NACIONAL SINDICAL
E-mail: coddhlab@ens.org.co
A.A. 12175
Medellín-Colombia

Executive Director-ENS
Luis Norberto Ríos Navarro

Academic Director
José Luciano Sanín Vásquez

Human Rights Unit Director
Juan Bernardo Rosado Duque

Traslate
Jana Silverman

Picture:
"Punto, cadeneta, punto"
John Jairo Cárdenas, 2005

This bulletin has been published with the financial assistance of the European Community. The points of view expressed in it solely reflect the opinion of the Escuela Nacional Sindical and in no way represent the official point of view of the European Commission

prohibida, para impedir con ello que los signos de interrogación se sigan abriendo y dejando en medio sólo el dolor y la tragedia.

Así pues, las mujeres continúan esperando y trabajando para que la balanza de la justicia algún día se equilibre, porque en este momento está inclinada del lado de los victimarios, y a ellas se las sigue condenando al olvido.

Alternativas y herramientas para las mujeres

El protocolo facultativo de la CEDAW es el instrumento con el que se desarrolla la iniciativa del “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”, incluido en la convención, pero sin que ésta regule su funcionamiento.

Dicho comité está integrado por veintitrés expertas en temas de las mujeres y fue creado para vigilar la aplicación de la convención por los estados parte, o sea, por los estados que han ratificado la convención para aplicarla en su territorio.

Colombia, como Estado parte de la convención sobre la eliminación de todas las for-

mas de discriminación contra la mujer, aprobada por la asamblea de Naciones Unidas el día 18 de diciembre de 1979 y por Colombia con la ley 51 de 1981 (además de ser ratificada el 9 de enero de 1982), condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y se compromete entonces a adoptar políticas encaminadas a eliminar sin dilaciones tal discriminación por todos los medios apropiados.

Por ello también ratifica en el 2005 el protocolo facultativo de la CEDAW, que constituye una de las más eficaces herramientas para lograr el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados tanto con la ONU, como con las mujeres que pueblan sus territorios.

La ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW en Colombia es un avance significativo en materia de protección a los derechos de la mujer, y sin lugar a dudas se convierte en un hecho político y jurídico de carácter sustancial en las condiciones sociales, económicas, culturales y, sobre todo, en el contexto de guerra que actualmente se vive en el país.

Violences yet to be named

Violations against life, freedom and integrity of unionized women in Colombia

By: Guillermo Correa

Human Rights Area

Escuela Nacional Sindical

A general panorama

During the period from January 1, 1991 to December 31, 2005, the unionized women in Colombia have been victims of 1.797 violations against their life, freedom and integrity. The cases can be broken down in the following way: 219 women were murdered, 854 received death threats, 21 were victims of assassination attempts, 10 were disappeared, 586 were forcibly displaced, 36 were detained arbitrarily, 17 were victims of kidnapping, 44 were harassed and pursued for their union activity and 5 were tortured.

A general look at these data reveals us that in the last five years violations against the human rights of unionized women have grown alarmingly throughout the national territory. This makes evident a serious panorama, because 53,4% of these femicides has taken place in the last five years, percentage equivalent to 117 murders. Likewise, 45.13% of the total violations have occurred during this same period,

and the most critical situations are death threats against directing women and leaders (438 registered cases); attacks (fifteen registered cases); persecutions and harassments (40 registered cases), and kidnappings (ten registered cases).

Characteristics of these violations¹

- From 2000 through 2005, 19 unionized women annually were murdered on the average.
- In 2003, the total number of violations against unionized women increased 395%: from 41 cases in 2002, to 203 in 2003; this growth continued in 2004, when there was a 18,7% increase, that is to say, there were 242 cases. On 2005 there was a 37,19% reduction, since the number of registered cases went down to 152 violations.
- From 1991 to 2005, the educational sector was the most affected in relation to violations against unionized women (1.575 cases, 87,6% of the total). Secondly, with

1. These numbers have been updated by the search of historical information, so is possible to find some variations in the information previously published in the reports of human rights of Escuela Nacional Sindical.

great difference in number, agricultural sector workers come after, with 68 cases; then, the women of the health sector, 46 cases; the commerce sector, 12 cases; the workers of the manufacture industry, 10 cases and, finally, those of communications and transport with 10 cases.

- As for number of murders, the education workers are also the most affected, with 147 women murdered; among workers of the agricultural sector there were 30 women murdered, and also 22 women pertaining to health sector unions.
- The most dangerous departments for unionized women are: Antioquia, where 92 homicides against worker women were registered; in Valle del Cauca, where 12 murders were registered; 11 in Norte de Santander; 9 in Caquetá, Magdalena and Cauca, and 7 in Cesar and Santander.

Reflections on the violence against unionized women

An invisible violence with real victims

In a country with levels of human rights violations so disproportionate and with such alarming statistical figures related to murders, kidnappings and displacement –among other serious problems–, there may exist a tendency to believe that the statistics related to violations of unionized women don't reflect the great complexity and graveness of the situation, especially in a country where indicators referring to the human rights situation seemed to be in a competition to reach the biggest horror. In this way, the statistics about violations against unionized women are often underestimated and even observed with a certain passivity and indifference.

In Colombia, womens organizations and movements have consolidated and strengthened, and have a growing and effective presence on the ground. Nevertheless, violations against unionized women have not still been named with the forcefulness of their graveness, and the serious danger that this situation represents for the union movement has not still been visualized. Certainly, the lack of visibility of and marginality of these violations has been their most characteristic features.

The reports about women by both international and national organizations have not fully included the violence against women as a type of anti-union violence. In some reports this category doesn't exist, as if unionized women had not been victims of murders, death threats, displacement or disappearance because of their union activity. As if violence against unionized women was a violence of a different nature, which has nothing to do with their union activity.

In the last two reports about the human rights of unionized workers, the Escuela Nacional Sindical has pointed out with concern the aggravated and dramatic increase of violations against the human rights of unionized women in Colombia. Despite this, initiatives and proposals to study and denounce this situation have been absent from the big debates on national union activity.

Today, unionized women represent 36% of the whole of unionized population (that is to say that there are nearly 300.000 women among the 850.000 workers unionized in the country). If we take into account this figure when reading about violations against women, we can understand the implications of the murder of a female union leader. If those 219 murdered of unionized women are put in perspective, it is possible to contemplate the graveness and complexity of the situation, and think

about the great number of communities left without their social leaders, the students left without teachers, the families left without mothers, the union organizations left without their directors, to just mention a few examples.

Distortions and prejudices

On July 15th, 2004, in the city of Bucaramanga, union leader, mother and housewife Carmen Elisa Nova was murdered. She had been engaged in the union movement for twenty-eight years and she had fulfilled various positions in the union board of directors. At the moment she was murdered, she had been elected as supervisor of the *Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Santander, Sintraclínicas*. Her death left a five year old girl orphaned.

After the murder of Carmen Elisa, a wave of threats was spread by the illegal paramilitary army, who utilized the union leader killing to force other union leaders in the region to silence their accusations. These threats were directed especially against the union president, Teresa Báez, Carmen's personal friend, and who has also been a victim of multiple threats, harassments, illegal searches of her residence, and persecutions. Teresa has the daily responsibilities of her work as a nurse, her union activism, her housework and the rearing of her son, who has been witness of all kind of violent actions against his mother, and for that reason he must stay locked at home while his mother works.

Beyond the statistical figures, violations against unionized women must be understood in a more diverse and more complex sense, including symbolic, semantic, political and cultural dimensions. We can not make a reading of these violent acts exclusively as part of the

discriminatory gender relationship between men and women, in which women have been historically subjected; this antiunion violence is not just a matter of gender discrimination. So, if the antiunion violence category is seen just as gender violence, it becomes invisible, fusing and confusing the situation. In this sense, the specific violence against unionized women must be analyzed, taking also into account the nature of violence against labour unionists.

These women are victims of two historical discriminations: on one hand, because of their historical reality as women and, on the other hand, because of their union activity, that is to say, they are subjected by a patriarchal and male culture which is also strongly antiunion. This consideration implies the necessity to locate each violence or violation in its particular dimension in order to not overlook any of its aspects.

Nevertheless, to avoid falling in interpretive dichotomies, divisions or biased concepts, it is necessary to take into account that women's union activism must be considered in relation to their other multiple roles. Frequently, it is said that violence against unionized women human rights are due to crimes of passion, generalized social violence, or other, non-specified reasons. It intends to deny the antiunion character of the violation with the argument that victims were carrying out non-union related activities, that is, they were not involved in a strike or collective bargaining negotiations.

It is clear that manifestations of violence are diverse, and they can be tied to particular causes. But, the complexity and simultaneity of women's diverse roles do not break down in practice; that is to say, a woman is not a family mother at a specific hour, teacher at another hour and union member later on. For

that reason, an interpretation which doesn't consider the violation of the unionized women rights in relation with its other roles, also ignores a very complex situation and offers a partial vision of it. Even more, it favours the performance of murderers who shield their guilt before the popular explanation according to which all violence against women is either a crime of passion or social violence.

Women have facilitated the articulation of syndicalism with other social movements, and they have re-visualized and recreated union activity. For example, women teachers that live in diverse regions are at the same time community, education and union leaders, and none of their activities has a defined limit or is kept apart from the other ones, since their roles are diverse and simultaneous. However, murders of women teachers are interpreted as a consequence of the ongoing war or of social violence, and never as a result of their union activity. The above-mentioned situation would force us to re-state what we understand by union activity.

Marking the body and erasing its humanity

Other considerations let us understand violations against unionized women in their symbolic and semantic dimension. In the first place, and without trying to establish hierarchies in the forms of violence, we should affirm that violence against life, integrity and freedom of unionized women possess a particular form and different content if compared with violence against unionized men.

When examining the systematic violence exercised against union men, it can be observed that murderers in most cases have the clear intention of erasing or silencing the union leader by means of their death. This kind of violence

is functional and direct. It's not usual to find an elaborated violence, or symbolic one, against union men, except in situations in which victim is tortured in order to obtain information.

On the other hand, violence exercised against unionized women carry a strong meaning, a semantic load, since murderers appeal to a symbolic and perverse practice seeking to degrade the victim and to exploit the symbolic content culturally carried by the female body; a merciless treatment that causes collective terror.

Executioners inflict their sadness on the body of the union woman, with the clear intention of communicating a clear message to the group or community. In that degraded, destroyed, subjected and reduced body, an absence of limits and considerations and a lack of scruples and human sense are inscribed. It's an example without reserves about their capacity of generating pain. It is clear they want to annul the victim sending a message to the other ones: "Hey, look what we are capable of doing! Observe our lack of pity, contemplate the horror that awaits you! You are warned. Enter in panic! We are not playing!"

In the violence against men, the victim is the addressee and the end of the action. In the violence against women, the victim becomes a means, a public warning which annuls their humanity and generates a terror fed by cultural meanings: the mother murdered and tortured; the image of beauty insulted and destroyed until death; the community leader woman subdued and reduced; the wife raped, etc.

The direct violence against women possesses, then, a strong cultural connotation. In their social role as mothers, they are not only responsible for their life but also for the life, integrity and well-being of their children. This

implies that any action against a woman has a direct effect against her entire family. Based on this logic, victimizers have developed singular forms to press or to decimate those who they consider their opponents. In the case of unionized women, the effect inflicted by the murderers is a high dose of terror.

From collateral victims to messengers of terror

“On May 29 2003, teacher María Rebeca López, affiliated to Adida, was forced to descend from a bus and then she was shot before her three year old son. Teacher Liliana Caicedo, affiliated to Simana, had requested the National Army not to use the school facilities as a base camp, because it put the students at a high risk. Days later, on May 21st 2003, the teacher was taken out of her house, tortured and beheaded by unidentified people.² Teacher Ana Cecilia Duke was kidnapped and murdered by the ELN guerrilla army, as revenge against her father.³ Lina Mamian was murdered in front of her house, on August 10th 2003, after denouncing a member of the illegal paramilitary army. She was shot ten times. According to information of the community, the murderer, a paramilitary known in the region, was captured, but later on he was let go. His commandant, alias “Rubén”, paid a million pesos for his freedom.⁴

The teacher María Isabel Fuentes Millán, 32, graduate in Spanish and Literature, affiliated to Sutev, was murdered. She was shot three times. According to the accusations of the edu-

cation secretary,⁵ the murderers gathered students and teachers and shot the teacher before their eyes. María was mother of three girls, all younger than 11 years old.

The previous histories seem to compete between each other to reach the worst horror. Unfortunately, it is necessary to clarify that they only represent just some of the multiple and dramatic violations committed on a daily basis against unionized women in Colombia.

Traditionally, the antiunion violence against women has been interpreted as a collateral effect of war, excepting the attacks carried out against important union women leaders. In general, women are considered victims of an indiscriminate ongoing war, or accidental victims of violence against men. It is thought that union women fall murdered only as victims of stray bullets. For that reason, figures of violence against women have been in most cases, underrated, trivialized, and kept silent.

In the long run, the increasing violence against women affects the entire family unit. This compromises the integrity of people not belonging to the union movement.

With the substantial increase of direct violations against unionized women, it is possible to underrate the thesis according to which these crimes are only collateral damage. The cases exposed above help to detect a logic of discriminatory violence, whose objectives go beyond the simple intention of silencing the victims. These actions reflect a symbolic and strategic purpose; they intend to subdue the com-

2. Liliana Caicedo Pérez was affiliated to the Union Trades Educator of Nariño-Simana, *Noche y Niebla*, August, 2003, p. 277.

3. Ana Cecilia Duque was kidnapped and murdered the of 26 Abril, 2003. See public opinion communicate of ENS. 2 May, 2003.

4. Lina Mamian. To respect see the portal web: www.nocheyniebla.org, “Casos y hechos”, August, 2003.

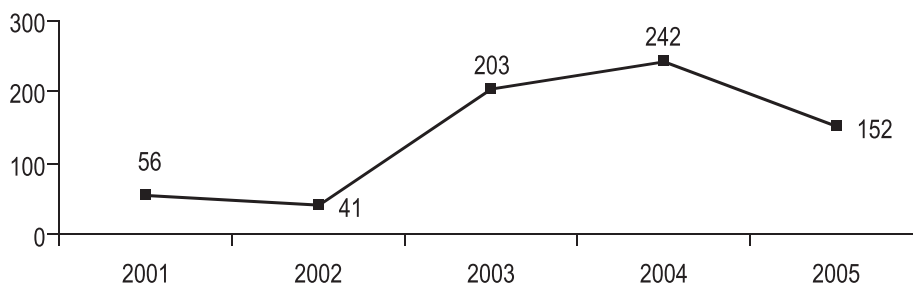
5. José Martín Hincapié Álvarez, Education Secretary of Tuluá, Valle del Cauca, 2006.

munity by means of terror.

A woman murdered before her children, a woman mutilated, a woman whose children's lives are threatened as a means of pressure, becomes a symbolic vehicle through which the message is exemplary and touches others. Therefore, it could be affirmed that such viola-

tions are not an end in and of themselves, their intention is not merely punishment or revenge. These are images of terror directed to other people: children, relatives, neighbours and union members. These violations, overwhelmingly, are intended to force these people to choose between preserving their lives and physical integrity, and union activity.

Violations against unionized women 2001-2005



Total violent actions against life, freedom and physical integrity of unionized women 1° enero 1991- 31 diciembre 2005

Type of violation	Number of cases	Percentage
Illegal search	4	0,22
Threats	854	47,52
Attacks	21	1,17
Disappearance	10	0,56
Forced displacement	586	32,61
Detentions	36	2,00
Femicide (Assassination of women)	219	12,19
Harassments	45	2,45
Kidnappings	17	2,95
Tortures	5	0,28
Total	1.797	100,00

Source: Human Rights Database, Escuela Nacional Sindical.

Total violations by economic sector 1991-2005

Economic division	Number of cases	Percentage
Agriculture, Hunting and fishing	68	3,78
Commerce	12	0,67
Electricity, gas and water	7	0,39
Financial	5	0,28
Manufacturin industry	10	0,56
Mines and quarries	4	0,22
Services education	1.575	87,65
Services municipal and official workes	18	1,00
Services judicial	13	0,72
Services health	48	2,67
Other services	17	0,94
Transport and communications	10	0,56
Other economic activity not specified	10	0,55
Total	1.797	100,00

Source: Human Rights Database, Escuela Nacional Sindical.

Cases of Constitutional Protections for Women

By:

Beatriz E. Alzate Vargas
Veronica Jaramillo Jaramillo

Human and Labor Rights Division
Escuela Nacional Sindical

In a society such as ours, with gender inequalities so pronounced, women have been historically discriminated against, both in the private sphere (as self-sacrificing wives and mothers) as well as in the public sphere (as workers, who must perform better than men). In order to obtain a job, a woman must have intelligence, beauty, capacity to work, and free time available, with this final requirement difficult to achieve as she is also a mother. While a man has more availability to work on weekends or stay at the office until late at night, a woman must attend to housework, such as cleaning the place of residence, taking care of the children, as well as taking care of her spouse. A study conducted in the United States proves this point, as it documents that 49% of successful women do not have children, compared with a mere 19% of successful men. "Women professionals with managerial roles are constantly obliged to choose between a successful career and having a family".¹ In Colombia, women are discriminated from the

minute they participate in a job interview, where they are asked if they are married, if they have children, and if they are thinking of having additional children. Their responses become a factor taken into account when deciding who gets hired; women are sometimes also forced to take a pregnancy test, and in certain occasions, women are even forced to show proof at a job interview that they have had their tubes tied. Once they are hired, women continue to be discriminated against when they receive lower salaries than men who perform similar duties, or when the employer makes great demands on them in order to earn the same salary as the men. In addition, women are subject to sexual and workplace harassment by their workmates and bosses much more frequently than men.

Due to this, it is necessary to protect women who have been discriminated against or excluded due to cultural stereotypes created by society. It is necessary that the public authorities comply with and promote the principle of

1. Maria Fernanda Moreno, "Sobre la brecha salarial", *Semana*, May 2005.

respect and equality enshrined in Articles 13 and 43 of the Constitution, and that the courts as well as the State administration make their decisions, respecting women's fundamental rights and protecting the women who are concretely discriminated against. Several important cases heard by the Constitutional Court take up these issues.

Several of the rulings emitted by the Constitutional Court are concrete examples of the work that is being done to lessen the discrimination that affects many women in the country. These rulings apply the related norms and constitutional principles, and develop affirmative actions in order to give special protections to women, especially those that are heads of their household.

Rulings which Protect Women's Labor Rights

Enhanced Job Stability

Through ruling T-173/2005,² the Constitutional Court changed its jurisprudence and established that pregnant women have a Constitutional right to enhanced job stability, since one of the clearest manifestations of sex discrimination has been, and continues to be, the unjustified firing of women who are bearing children (due to the additional costs or other inconveniences which this phenomenon can signify for companies). For this reason, Constitutional jurisprudence has taken into consideration that, as a consequence of the equality principle, pregnant women have a fundamental right to not lose their jobs for this reason.

Women employees of the judicial branch

of the government who have either named or provisional contracts also enjoy this right, as its protection inevitably signifies the impossibility that a pregnant woman can be removed from her job as a result of her pregnancy. Due to this, exceptions must be made to the principle that civil servants with named contracts have job stability, while those with provisional contracts do not, as maternity job protections apply to all pregnant women, even if they have provisional contracts.

Equally, ruling T-228/2005³ also guarantees the right to "enhanced job stability" in the following way:

It is possible to, through the use of a lawsuit based on Constitutional principles; protect the right to enhanced job stability for pregnant women, if the following conditions arise. First of all, there must exist a contractual relationship (either through a labor or a civil service contract) between the woman and the person or entity being sued; secondly, the firing must occur during the pregnancy or during the first three months after the woman has given birth; thirdly, the firing has occurred without the proper procedures being followed; in fourth place, it must be shown that the employer knew or should have known of the woman's pregnancy; and in fifth place, the firing threatens the ability of the woman to meet her basic needs, or that the arbitrariness of the firing was obvious and inflicted grave and manifest harm to her.

Colombian law dictates that pregnant women workers have the right to retain their jobs until the moment in which their employers –public or private– show a valid reason to fire them. For both public and private sector

2. Author of the ruling: Jaime Araujo Rentería

3. Author of the ruling: Jaime Córdoba Triviño.

women workers, this reason must be approved by the competent labor authority. For civil servants, both career civil servants as well as those specifically named by the current government, the valid reason must be clearly explained in the administrative act through in which the firing is ordered. If this is not the case, the competent legal authority should order the reinstatement of the worker, as well as the payment of the salary and benefits that she stopped receiving.

In this ruling, the Constitutional Court also showed that the special protection that a pregnant worker receives does not just protect her right to economic subsistence, but also her rights to equal treatment, effective work opportunities, and free expression, among others. As a consequence, the severance pay that must be paid to workers with certain kinds of labor contracts in order to remedy this kind of discrimination is insufficient to guarantee all the rights which are threatened by an unmerited firing, since it merely remedies just one of the affected rights. For this reason, the Court has interpreted that pregnant workers who have been fired or laid off have the right to be reinstated in all cases in which the layoff took place without the permission of the competent labor authority, or in cases in which the administrative act insufficiently show the necessity of the firing, thus proving that a discriminatory practice has taken place.

Labor Protections for Single Mothers who are Heads of their Household

Through ruling SU-388/2005,⁴ the Constitutional Court ordered the reinstatement of all

of the single mothers who are heads of their household, who were fired by Telecom, during the company's restructuring in 2003. Although this particular ruling came about because 23 single mothers presented lawsuits based on Constitutional principles, the Court extended the effect of the ruling to all single mothers who in other opportunities sued and obtained negative rulings, as well as to the single mothers who did not sue.

Single mothers who are heads of their household enjoy a special protection, enshrined in Article 43 of the Constitution. This protection is one of the so-called affirmative or positive actions, which favor people or groups historically discriminated against, with the intent of reducing or eliminating social inequalities. This special protection exists, not just to protect the women, but to protect the family unit and especially the children which are dependents of these single mothers. The highest Constitutional tribunal used this argumentation in its ruling T-546/2005,⁵ which also states how even if other judicial mechanisms exist as part of processes of governmental restructuring, in order to assure the enhanced labor stability for single mothers, these mechanisms are not the most ideal in order to ensure the protection of the fundamental rights of these women, as lawsuits based on Constitutional principles are the most effective means to accomplish this.

Through ruling T-493/2005,⁶ which resolved various pending legal actions, the Constitutional Court applied ruling SU-388/05. This ruling determined that the accumulated cases all relate to the group of single mothers who are heads of their household, which benefit

4. Author of the ruling: Clara Inés Vargas Hernández.

5. Author of the ruling: Jaime Araujo Rentería.

6. Author of the ruling: Manuel José Cepeda Espinosa

from the extension of special effects illustrated in ruling SU-388/05. This same ruling orders the liquidator of the company to apply these special effects. It is worth noting that, very few judicial decisions have determined that the ruling has effect for people different from those who were part of the legal action. For this reason, these rulings have a great importance in emphasizing the Constitutional protections that single mothers enjoy.

Prohibitions on Obligatory Pregnancy Tests

An employer cannot obligate a woman to take a pregnancy test, in order for her to obtain or retain employment. This is what the Constitutional Court determined in ruling T-873/2005,⁷ through considering illegitimate and unconstitutional the conduct of an employer who tries to reproach or impede the pregnancy of a female worker, or who investigates if a worker is pregnant, in order to determine if she obtains, retains, or receives a promotion in her job. Obligatory pregnancy tests in this situation violate the rights to intimacy, free expression, and employment. None of these rights can be sacrificed based on the desire of the employer, who forces a woman to choose between a work opportunity and her natural expectation to become a mother and form a family.

Obligatory pregnancy tests are also prohibited as a requirement for the renewal of a contract under the figure of an associated work cooperative. For this reason, the Court reminds that the formal inscription in one of these cooperatives signifies that in practice, a work relation exists, when a relation of subordination is established with the member of the cooperative.

7. Author of the ruling: Manuel José Cepeda Espinosa

8. Author of the ruling: Manuel José Cepeda Espinosa

Rulings which Protect Women's Rights in Other Aspects of Their Lives

Conditions to Determine that a Single Mother is Head of her Household can Receive Special Benefits

The Constitutional Court determined, to resolve a lawsuit against "Law 750 of 2002, in which norms are expedited regarding the special help that single mothers who are heads of household can receive in the form of domiciliary arrest and community service", that men's right to equal treatment is not violated, since domiciliary arrest is only permitted under this law for single mothers who are heads of household. Article 1 of this law states that "a prison sentence can be fulfilled, in the case of lawbreakers who are female heads of household, in their place of residence..." for a determinate number of crimes, and when certain requisites hold, such as "the personal, labor, family, or social record of the lawbreaker allows the competent judicial authority to determine that she will not put the community or the underage children or children with permanent mental incapacities in her care at risk."

This norm was declared to be constitutional through ruling C-184/2003,⁸ in which the Court manifests that

The special help given to single mothers heads of household is a constitutional mandate directed towards all public authorities. This policy seeks to (i) promote real and effective equality between both sexes; (ii) acknowledge the weighty responsibilities that fall upon single mothers, creating a governmental duty to help

them in all aspects of their lives and personal development, in order to compensate, alleviate, and make less onerous the burden of sustaining their families; and (iii) offer protection in this way to the family, recognizing it as the basic social unit.

It was also taken into account, both by the legislators who produced Law 750/02 as well as the Constitutional Court in the issuing of this ruling, that the negative consequences related to the absence of the mother due to her detainment are more prevalent in lower societal strata. In many of these cases, the children are forced to seek out their daily sustenance and remain alone without any help or control of any kind, generating societal consequences even more dire, thus becoming a factor which increases the rate of criminality.

Equally, this law does not violate the rights of male heads of household, because the legislators can adopt protective measures for people who make up groups for which the Constitution expressly establishes a mandate of special help, without disavowing the principle of equal treatment.

Thus, it is not constitutionally admissible that a male head of household solicits that a measure adopted by legislators to assist female heads of household be applied to him, on the pretense of a supposed violation of the principle of equal treatment, when Article 43 of the Constitution precisely seeks to serve as sustenance for legislators and the State to formulate special measures favoring that group, without having to extend them to others, in this case, men in the same circumstances. However, the Court has signaled that the affirmative actions taken should respect constitutional principles in order to avoid, among other things, that they become unreasonable or disproportionate measures.

Thus expresses the ruling, which later adds:

Law 750 of 2002 legitimately creates a special regime of domiciliary arrest, in the development of a specific constitutional mandate which favors minors of age and helps single mothers who are heads of household. In conclusion, the principle of equal treatment does not demand the extension to men of special measures designed for female heads of household, which allow, when certain legal requirements are met, the right to domiciliary arrest. Equally, the right to have a family does not impede that those who have been sentenced to prison terms are separated from their families. Thus, the mentioned right does not also have to be granted to male heads of household as well, so that they can also enjoy the presence of their family.

However, when the legal requirements are met, this benefit can be conceded by a judge to men who, in reality, live under the same circumstances as a single mother head of household, in order to protect in certain specific cases, the “higher interest in the minor of age or in the impaired child”.

In this ruling, the high court signaled that to obtain the status of single mother who is head of her household, the following conditions must be met:

1. She is responsible for minors of age or for other people with incapacities that do not allow them to work.
2. That this responsibility is of a permanent character.
3. That the partner does not fulfill his obligations as a father, in addition to permanently abandoning the home; or the partner does not assume the responsibilities that correspond to him due to truly insuperable reasons, such as physical, sensory, psychic or

mental incapacities or, obviously, due to his death.

4. That there is a substantial deficit of assistance by other members of the family, signifying that the mother must absorb the sole responsibility of sustaining the household.

Discrimination Due to Women's Civil Status

Women are not obliged to divulge their civil status. The Constitutional Court arrived at this conclusion in ruling C-101/2005,⁹ which declares unconstitutional Article 1134 of the Civil Code, which permitted executors of wills to condition the use and enjoyment of a pension by a woman, provided that she remained single or widowed.

"This condition might have been logical in a social and economic epoch which was overwhelmingly patriarchal, where the woman was seen as an adornment whose function was to serve and make happy the men in her life [...] This norm perpetuated the historical discrimination to which women have been submitted." For this reason, the Court ruled that now no constitutionally valid reason exists to permit this difference in treatment for women, compared to the treatment given to men (to whom the same condition is not imposed). This difference in treatment is a discriminatory act which violates the fundamental right of equal treatment, and does not recognize the special protection that the State should provide to women, in order to guarantee the real and effective equality in terms of enjoyment of rights. Under actual constitutional law, sex cannot be a criteria which differentiates between individuals who are in the same situation, such as people who

need to obtain an inheritance in order to obtain their sustenance. In addition, this norm violated the right to freedom of expression.

Women's Intimacy

The intimacy of women who are victims of sex crimes must be respected. This was the thesis which the Constitutional Court developed in ruling T-453/2005,¹⁰ which states that, in relation to victims of sex crimes, international law establishes various commitments so that the State guarantees to women who have been victims of these kinds of crimes, their right to be treated with consideration and with respect to their dignity, and that measures are taken to avoid that they are victimized a second time. In effect, some of the international treaties of which Colombia is a signatory deal with the issue of the protection of victims of sex crimes in the context of the criminal legal system. In addition, they have recognized the obligation of State authorities to treat these victims with dignity and respect, and to adopt measures in order to reduce the risk of a double victimization through the collecting of evidence or other judicial tasks, or in the management of information about the facts of the crime and the identity of the victims.

From the previous argument, it is concluded that, when a woman is a victim of a sex crime, she has the constitutional right to have her right to intimacy protected, against the practice of evidence collection which implies an unreasonable, unnecessary, and disproportionate intrusion in her intimate life, for example, when there is a general investigation about her sexual or social behavior previously or following the acts which are being investigated. This circumstance transforms the collected or solicited evi-

9. Author of the ruling: Alfredo Beltrán Sierra

10. Author of the ruling: Manuel José Cepeda Espinosa

dence into constitutionally inadmissible evidence, before which both the Court and the legislative branch order its exclusion from any legal proceeding.

Freedom of Expression

If the directors of a prison, or any other prison authority, give an order in which women visitors are required to wear a skirt in order to be able to enter and remain inside the establishment, this is a clear violation of the fundamental right to due process. Ruling T-624/2005¹¹ of the Constitutional Court establishes this, as no norm exists which contains this requirement (in fact, Law 65 of 1993 prohibits all forms of discrimination, which can be found in this case due to sex). As any reasonable basis to require women visitors to use this kind of garment clearly does not exist, this obligation is a form of unequal treatment, unjustifiable and impermissible under the Constitution. This treatment also violates the right to freedom of expression, as it imposes upon women a certain form of dress which cannot be explained through a judicial motive, such as in the case of prisoners.

Protection of Women's Intimacy and Their Right to Equality

The Constitutional Court, through ruling T-848/2005,¹² has stated again that the order to remove one's underwear during the body searches before entering a penitentiary center, the searching of genitals and the obligation to do squats in order to check if the person is carrying any dangerous object, is a type of body search which is impermissible, unconstitutional, illegal, and not contemplated in administrative

rules. However, this type of practice can be carried out if there is a founded basis, only when the affected person gives their informed consent and the search is conducted in such a way in which the modesty and personal decorum, as well as the physical and legal integrity of the searched person is not violated. The previous conditions require that a judicial order is served, there is legal supervision, and that the search is carried out by expert personnel, using adequate instruments and in proper sanitary conditions.

Equally, the prohibition of the entry of women visitors during their period of menstruation is an unconstitutional practice, as women visitors cannot be discriminated due to this situation. If it is constitutionally unreasonable that prison guards carry out body searches that include vaginal touches, the prohibition of all women visitors who are menstruating can be considered even less reasonable. To be in that state does not constitute any evidence or indication that the woman visitor will commit an illicit act.

Protections for Pregnant Students

The Constitutional Court has repeatedly stated that the requisite that a pregnant student must wear a uniform of a different color, the inclusion of these students in a process removing them from the school, the requirement that these students change the time when they attend school, or the imposition of any other discriminatory treatment, constitutes a moral sanction which is constitutionally inadmissible. Ruling T-918/2005¹³ particularly states that the pregnancy of a student does not limit or restrict her right to an education. The codes of

11. Author of the ruling: Alvaro Tafur Galvis

12. Author of the ruling: Manuel José Cepeda Espinosa

13. Author of the ruling: Jaime Córdoba Triviño

conduct of educational institutions cannot explicitly or implicitly typify the pregnancy of a student as a fault or result of bad behavior.

The previous cases are just a few which offer special protections to women, to ameliorate the enormous discrimination that they suffer. This shows how, although there have been

changes in respect to gender equality, these changes have not been sufficient enough to end the existing inequalities, proving the necessity for social and public policies more committed to the promotion and recognition of the right to equal treatment for women.

Between Resistance and Re-insistence. Against Silence and Forgetting*

Corporación para la Vida Mujeres que Crean

Forgetting, though, has not only served for forgetting,
rather for destruction and death as well
Marta Cecilia Vélez Saldarriaga

One Saturday night I was with some of my girlfriends, and we went to dance in the next neighborhood over, because there is no good place to dance near home. While we were there, two of my friends started getting into a fight with each other right there in the street. At one point, this guy I know told us to stop all the fighting, because, if we didn't, the 'boys' in charge would drop us in the ditch or the gutter, as they already had done with some other people.

So we thought it would be better for us to leave, but in any case they also said that if they saw us fighting again, they'd drop us in the gutter so we'd learn something.

They didn't drop us that night because we left the place, but other persons have been punished. Women have been threatened a lot, especially when they fight in the street, and men have been threatened if they do something these 'boys' don't like.

I don't know who the people are who carry out this punishment, but many people have told us they are the ones who run things around here and tell people what they can or cannot do.

Personal account by a young woman from the northeastern section of Medellín in November 2005.

Presentation

Corporación para la Vida Mujeres que Crean (*Women Creating for Life Corporation*) wishes to contribute to the construction of a model of justice that recognizes women's voices. In particular, the Corporation wishes to

gather the voices of the women who have been victims of the armed conflict in the city of Medellín and the Aburra Valley. We are committed to visibilizing women's human rights and showing how they are ignored and violated.

1. Report on human rights violations against women, as well as international humanitarian law in the city of Medellín and the metropolitan area in 2005.

We are certain this is a very important historical moment for the city and the country, as much as in terms of the negotiation of the armed political conflict, as in the rapprochement between the national government and the actors in the conflict. In this regard, we want the public debate to include, equally and in detail, the situation of women. Additionally, the debate must include the significance, both past and current, of the armed actors' presence in daily life, as well as their power of domination and control.

In addition to continuing to follow up on the situation of respecting women's rights, in 2005, the Corporation returns to closely look at the issue of impunity. Likewise, questions arise concerning the situation of the armed conflict experienced in the city of Medellín and that these experiences are a part of the controversial aspects of the so-called present peace or negotiation processes.

The reports from 2002, 2003 and 2004 have presented a quantitative and qualitative analysis on the violation of some human rights of women. Due to the socio-political and conflictive nature of the city, these reports show that the violation of these rights affect women with greater magnitude and in greater proportion.

In 2005, the passage of a bill meant to overcome the conflict with some of the armed actors allows a scenario of impunity for those who have committed serious violations and crimes against humanity. By way of these crimes, these actors have clearly shown their power in Medellín and Colombia. They have also violently attacked women and turned women's lives and bodies into a battleground.

By way of this task of information gathering and analysis, we believe we can contribute to

maintaining collective memory. We also believe we can help the governmental and judicial authorities in designing and implementing policies and bringing to trial those responsible for the crimes committed within the context of the armed conflict. These elements must be taken into account in regarding the conditions of the historical discrimination and oppression against women.

Humanity wounded: women and the right to life

Discussing women's human rights is an issue that transcends murder statistics. It would be more precise to speak of full conditions for life. Nevertheless, due to the international reports on the human rights situation, the tendency is to give greater importance to statistics concerning violent deaths such as murder.

Indisputably, this explains why governments understand the security conditions as related to the amount of murders committed and the rate of murders per 100,000 inhabitants.

In recent years, the murder rate in the city of Medellín has lowered substantially and, in this way, is no longer one of the most violent cities in the world. From 381 murders per 100,000 inhabitants in 1991, it has lowered to 54 in 2004.

The current local government (2002-2006) presents this decrease as its principal source and proof of the improvement in the human rights situation. Even though this trend began during the Luis Pérez mayoral administration (2001-2003), it consolidated and even stabilized under the current municipal administration of Sergio Fajardo.

Since 2002, year in which the Corporation began to publish this report, statistics have born the following tendency:

Murders in Medellin by Year

Year	Women	%	Men	%	City Total	Variation
2003	128	7,2	1.641	92,7	1.769	-52%
2004	84	8,9	939	91,7	1.023	-42%
2005	25	8,2	302	92,3	327	-32%

Over the last three years, the murder of women has represented the following percentages: 7,2% of total murders in 2003, 8,9% in 2004 and 8,2% in the first six months of 2005. This means that murders increased 1,7% in 2004 in relation to 2003, whereas in the first six months of 2005, murders decreased 0,7% in relation to 2004. Although there has been a decrease in the amount of murders in the city, it can be seen that this has not been as significant for the female population, and in some cases, as in 2004, there is even an increase of more than one percentage point.

A decrease in the deaths of women is not seen that follows the general trend. This could indicate that the armed conflict and delinquency are not the only causes for the violent deaths. It what concerns women, this is why the negotiation processes for the armed conflict, as well as other measures in the area of civilian security, are not sufficient. As long as a culture perpetuating the stereotypes of virility and love combined with the use of violence against women continues to subsist, society will not be able to effectively prevent and eliminate violence against women and, in particular, their deaths.

Sexual and reproductive rights of women: the most human of rights

In terms of sexual violence, the multiple facets demonstrated allow for diverse perspec-

tives, even though the reality continues to show the recurrence of a pattern of behavior that crushes the dignity of women and turns them into objects, ignoring the most basic right of deciding one's sexuality and reproduction. This act also becomes a way of dominating and humiliating women.

There is no decrease...

What occurs in the case of sexual violence against women? Are perhaps sexual and reproductive rights not a part of human rights? Why have indices improved over the last years and yet women are still being raped and physically abused? Is this perhaps not a significant fact for the local government inasmuch a no one is appointed to handle this issue (nor is it used as proof of the security in the city)? Or is it simply a private affair not deserving observance in terms of security policy or punishment for those responsible for these violations to the sexual and reproductive rights of women?

The statistics are truly alarming. According to denunciations, two women a day are victims of sexual abuse. Additionally, every day one woman reports having been raped. This means that there are even more cases, since fear, resistance and shame concerning reporting these violations continue to exist.

In the first six months of 2005, 413 women were given a physical exam because of some form of sexual aggression. That means at least

two women a day were victims of sexual violence. Of the women raped, 149 women bore evidence of penetration by a male sexual organ and 56 had been raped with other objects.

It has to be emphasized that 342 women

were under the age of eighteen years, and, of these persons, 293 were under the age of fifteen. This means that 82% of the women sexually assaulted were underage and 70% of them were under the age of fifteen.

Crimes against sexual freedom
Sexual violence from January to June

Year	Number of agredsions	Victims under the age of 18	Victims under the age of 15
2004	399	315	288
2005	413	342	293

Source: Medicina Legal.

The right to a life free from violence

In the first six months of 2005, four women died during episodes of intra-family violence, and in the second six months of 2005, three more women died this way. All seven were murdered by their respective sentimental partners, who had previously abused them.

Violence against women in the family atmosphere is an ongoing practice that transcends the spheres of the private domain when the consequences reach the magnitude of murder. These crimes can be completely prevented if an adequate and opportune attention is provided.

When women go before State protection agencies, normally they find that the functionaries, and even the female functionaries, of the institutions tend to blame the women for what had happened. In most cases, by way of conciliation processes, women are pressured to resolve the abuses, violations and irresponsibilities of their partners, which most times have consisted of crimes and violations to their and their children's human rights.

This is completely contrary to the adequate

and pertinent attention that is expected from an institution. Presently, regarding murder cases, a patriarchal and misogynistic justice system tends to argue on the grounds of extreme love. When a case is criminally investigated, such arguments as jealousy, unawareness and lack of lucidity are considered, which allows the violent act to be determined to be a 'crime of passion.' As multiple investigations have demonstrated, all of this does not take into account that these types of crimes are the outcome of a couple's conflictive relationship. This is not something that occurs abruptly or unconsciously, rather it is the attitude that an extreme violence resolves the problem.

The Attorney General's "Client Attention" Office assisted 18,015 persons from January to July 2005. Of these, 14,046 were women, which meant an average of 66 women per day. According to information from the Attorney General's Office, persons who came as couples were not included, but it is estimated that from 15 to 25 couples arrived on a daily basis to resolve problems of intra-family violence.

With broken wings: women's right to freedom

Persons forcibly disappeared from January to September 2004

2004	Total	Alive	Dead	Still disappeared
Women	71	45	5	21
Men	154	56	9	89

Source: Technical Investigation Body's (CTI) Person Identification Unit

Persons forcibly disappeared from January to September 2005

2004	Total	Alive	Dead	Still disappeared
Women	84	29	0	55
Men	144	36	4	104

Source: Technical Investigation Body's (CTI) Person Identification Unit

As can be seen in these charts, there has been a significant increase in the forced disappearance of women. If we compare the first nine months of 2004 with the first nine months of 2005, it can be seen that thirteen more women were forcibly disappeared, which corresponds to a 15% increase.

It can be said, then, that in terms of individual liberty the human rights situation has not improved in 2005 as compared to other years. This upholds the thesis of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Medellin, which claims that forced disappearance has increased in relation to other crimes.

According to information from the CTI, in Medellin, voluntary disappearances have also increased 19% in the first nine months of 2005. That is to say that, while in 2004 the percentage of persons voluntarily leaving their surroundings, without leaving a trace or information of their whereabouts, was 1%, over the same months in 2005 it increased to 20%.

Justice for internally displaced women

When women in situations of forced displacement reconstruct their history within the framework of violence and the armed conflict, memories arise that, apart from subjective healing effects, begin to provide new meanings to what happened. In addition to recovering their historical evolution as women and victims, this is a kind of memory that can also cover territories and actors, as well as recover the names of places, victims and victimizers. This is a kind of memory that in some way is able to take the mask away from the game of interests erected in the background of the country's armed conflict. This is a kind of memory that does not allow the presence and control of armed actors to be forgotten. It also does not allow the generalized practices of State omission and collusion to become accomplices to the destruction. This is a memory that lets women recognize that said practices continue to be present in the city and continue to determine

their action in private, social and political spheres.

Definitively, letting women speak who have been victims of forced displacement is to allow for the construction of a memory that breaks the silence and begins to open a path towards the truth that has been silenced and prohibited. Under this logic of silence, women have assumed that violence against them is a natural and unchangeable affair. In this way, women gotten 'used' to the violation of their rights. In addition to the violation that occurred, it is in this way the logic of submission and obedience is created. It is also a part of the silenced truth with its ongoing impunity that tears and daunts the female half of the human species.

While a history is constructed with large amounts of discrimination, exclusion and violence, another enemy intrudes into the lives of women and their territories. In addition to bearing the violence already recognized, the armed conflict not only bears the weapons that kill symbolically, but that also kill, destroy and annihilate in the physical world. For the vast majority of women, this enemy begins to exact an incomprehensible price.

It can take years for assistance to arrive. In Medellin, the Attention and Orientation Unit for the Internally Displaced Population is in charge of assisting these women. This institution only assists people if they previously made an appointment by telephone. It is almost impossible to get through on the line, especially when one does not have a telephone. Otherwise, a person has to repeatedly try to call on public telephone, even though it is almost impossible to get a connection. This, day after day, continues to strike against their dignity and exhaust their hope.

The exhausting tasks the situation of forced

displacement imposes on women makes it difficult for proposals, as well as for collective and organizing activities, to be coordinated to construct alternatives to resolve the common difficulties overwhelming women. Nonetheless, women's vital need to meet with their neighbors, as well as share in nostalgia and hopelessness, has allowed them to establish interweaving ties to strengthen them in the hard persistence for life.

It is time to recognize and make visible the invaluable work women perform with their families and neighborhoods, where they have leading roles in the reconstruction of the social fabric deteriorated by the armed conflict. Through immense effort in the midst of adversity, women are present with their history, using all of their vital resources to supplement the lack of attention and support by the State, as well as several irresponsible and unjust presidential administrations.

Women continue to fight for their rights, which include "truth, justice and reparation", and to speak their truth of being silenced and prohibited for such a long time. This is done to impede the doubts continuing to appear and to leave behind the pain and tragedy.

In this sense, women continue to hope and work so the scales of justice reach a balance some day, because at this time they favor the victimizers, while women continue to be condemned to being forgotten.

Alternatives and tools for women

The "Committee for the Elimination of Discrimination against Women" carries out its initiatives through the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). This instrument is included in the convention, but without its

functioning being formally regulated.

The committee is made up of twenty-three experts in women's affairs and was created to ensure the implementation of the Convention by the State Parties, in other words the States that have ratified the application of the Convention in their territory.

Colombia, as a State Party of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, approved by the United Nations General Assembly on December 18, 1979, and by Colombia through law 51 of 1981 (in addition to being ratified on January 9, 1982), condemns discrimination against women in all forms and so is committed to adopting policies meant to eliminate this dis-

crimination by all appropriate means without further delay.

This is why ratifying the Optional Protocol to the CEDAW in 2005 constituted one of the most effective tools for achieving the fulfillment of the commitments taken on by the states as much with the United Nations as with the women that live in their territories.

The Colombian ratification of the Optional Protocol to the CEDAW is a significant advancement in the protection of women's rights. Without a doubt, this ratification becomes a substantial political and judicial step in regards to social, economic and cultural conditions, especially within the context of war currently existing in Colombia.